



Economía, ideología y política en América Latina (Parte II)

Dr. Alberto Prieto Rozos*

Este segundo artículo aborda la problemática económica, ideológica y política de América Latina luego del triunfo de la Revolución Cubana, cuyo victorioso ejemplo incentivó todas las formas de lucha en la región. Hitos en la evolución del subcontinente, tras la epopeya del Che, fueron las novedosas concepciones de la Unidad Popular de Allende y las consecuencias del triunfo sandinista, que evidenciaron los falsos postulados de la Alianza para el Progreso y pusieron en crisis la aparente fortaleza del fascismo-militar. Luego se analiza el fracaso neoliberal en Argentina y el nuevo ascenso popular ejemplificado en la Revolución Bolivariana así como en el proceso integrador del ALBA, cuyo primer peldaño se alcanzó con el trascendental acuerdo entre Venezuela y Cuba.

Influjo de la revolución cubana

LA REVOLUCIÓN CUBANA significó un gigantesco avance en la historia de América Latina, pues mediante las reformas agraria, urbana, educacional, de salud, las nacionalizaciones de las propiedades extranjeras, la estatización de los grandes intereses criollos, la democratización de la vida social y política, la sociedad desembocó en el socialismo. Esto irritó a Estados Unidos, que a Cuba suspendió el suministro de combustible, prohibió la venta de azúcar en su tradicional mercado norteamericano, impuso un bloqueo económico

* Profesor titular de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana.

absoluto, alentó la organización de atentados y sabotajes, equipó a grupos de insurrectos contrarrevolucionarios, y auspició la invasión mercenaria de 1961. Ante los éxitos cubanos en transformar su sociedad y defenderla de los enemigos, los mas conscientes, audaces y decididos latinoamericanos abrazaron la lucha armada en aras de alcanzar su propia liberación. Y hubo quienes de inmediato se lanzaron al combate. Sucedió así, de forma precipitada y con poca fortuna, en Panamá, Haití y República Dominicana. En Paraguay, la guerrilla armada por los comunistas logró un apoyo del campesinado pobre, que entonces fue trasladado masivamente hacia la despoblada periferia con el financiamiento de la Alianza para el Progreso.

En Venezuela los acontecimientos fueron más trascendentes y complejos; la república emergió en 1958 de una tiranía para luego deslizarse hacia las arbitrariedades de un nuevo gobierno, que asombrado vio como el ala progresista de su partido Acción Democrática se desprendía para organizar un combativo Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Después fue la parte más avanzada de la oficialidad que se sublevó, en gestas sangrientamente aplastadas. Quienes sobrevivieron se unieron al MIR y a comunistas para impulsar el embate guerrillero, que en cinco años de lucha, sin embargo, no encontró las formas de arrastrar a la mayoría de la población a su causa. Esto facilitó que maniobras reformistas gubernamentales dividieran a los insurrectos, cuya lucha muchos consideraban como sectaria y vanguardista, lo cual deterioró aún más la fuerza de los partidarios de la guerra revolucionaria, hasta que al final todo el país se pacificó.

En América Latina los comunistas habían seguido considerando como válidos los acuerdos del VII Congreso de la Tercera Internacional, aún después de disuelta en 1943 esa organización. La Revolución Cubana en 1959 hizo reconsiderar dicha estrategia a muchos de la referida militancia, pues comprendieron que era posible tomar el poder y conformar una sociedad nueva. Esta conmoción de criterios pronto fue seguida por otra, en la forma del cisma chino-soviético de 1963, que enfrentó la “coexistencia pacífica” y la v’ política “electoralista” en los países subdesarrollados, a la “guerra popular prolongada” del campo a la ciudad en todo el Tercer Mundo. Ante esa pugna, Cuba convocó en 1964 a la Tercera Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina, que trazó una sinuosa línea conciliatoria entre enemigos y proclives de la lucha guerrillera, no obstante la cual, los “maoístas” escindieron a algunos de dichos partidos y constituyeron otros apellidados como “marxistas-leninistas”.

A su vez, durante 1967, en La Habana tuvo lugar la Conferencia de Solidaridad de América Latina, que defendió a los partícipes del combate armado en la región. A esta diversidad de tendencias revolucionarias, en el sub-continente habría que añadir la del trotskismo, que había contravenido sus viejas concepciones “obreristas” europeas por una visión “campesinista” latinoamericana, anhelante de tomar el poder sin alianzas pero no sabiendo cómo hacerlo.

Perú

En Perú, el Partido Obrero Revolucionario realizó un trabajo de concientización con los explotados campesinos quechuas del Cuzco, para luego animarlos a no pagar más la renta de las tierras en trabajo. El éxito de esa experiencia los llevó a un congreso partidista que decidió generalizarla, e impulsar la toma de tierras, a la vez que se pronunciaba contra la coexistencia pacífica y a favor de la Revolución Cubana. Este pronunciamiento provocó un choque con la Sección Latinoamericana del Trotskismo Ortodoxo, con la cual rompieron todo vínculo y después se sublevaron, pero fueron derrotados por el ejército. Mientras, en las ciudades, dentro de la antigua Alianza Popular Revolucionaria Americana crecía la disconformidad hacia la política de “convivencia” practicada por su dirigencia con los gobiernos conservadores. Surgió entonces el APRA-Rebelde, que transformado en Movimiento de Izquierda Revolucionaria se sublevó por el Cuzco y Junín. A la vez, estudiantes sin militancia y ex-miembros de la Juventud Comunista fundaron el Ejército de Liberación Nacional, que inició la lucha armada en Ayacucho, situado entre los dos frentes guerrilleros del MIR. Pero casi al unísono este y el ELN tropezaron con la misma dificultad; no hablaban el quechua, único idioma de los indígenas en la región. Esto, y la falta de vínculos previos entre revolucionarios y campesinos, provocó una mutua incomprensión, que en 1965 facilitó al ejército la derrota de los alzados.

La epopeya del Che

Ernesto Guevara, arquetipo de revolucionario internacionalista, regresó a Bolivia en noviembre de 1966 con el propósito de conformar una guerrilla compuesta por latinoamericanos. De inmediato se trasladó a Ñancahuazu, donde estaba el campamento erigido por la vanguardia. Pronto, sin embargo, padeció

los conflictos de la dirigencia del Partido Comunista, dividida en un sin número de tendencias entre detractores de la lucha armada y sus partidarios, que en su mayoría tampoco hacían nada a favor de ella. Esto no desvió al Che de sus propósitos, que acometió con precisión y perseverancia. Pero alejada de las simpatizantes bases obreras de las minas, sufriendo la gradual pérdida de hombres y la total ausencia de incorporación campesina, carente de contactos —por el abandono que de ella hizo la dirigencia del PCB— falta de medicinas y equipo, la guerrilla vio menguar su capacidad militar. Hasta que en una emboscada el Che fue herido e inmovilizado, y quedó indefenso. Entonces lo trasladaron al pueblo de Higuera, donde en una escuelita el 9 de octubre de 1967 se le asesinó. Empezaba a vivir eternamente.

Argentina

En Argentina, el triunfo de la Revolución Cubana indujo a radicalizados miembros de la Juventud Peronista a separarse de su previa militancia y organizar el Movimiento Peronista de Liberación, que defendió la lucha armada para tomar el poder. A finales de 1959 se alzaron en Tucumán, pero enseguida fueron liquidados. Un diverso origen tuvieron las Fuerzas Argentinas de Liberación, conformadas por gentes que procedían de una heterogénea izquierda, quienes se prepararon para acciones ciudadanas. Por su parte, el Ejército Guerrillero del Pueblo fue conformado por estudiantes que decidieron entrenarse en Salta, y aún estaban en dicha fase cuando a principios de 1964 fueron muertos o dispersados por la gendarmería. Al año se constituyó el Partido Revolucionario de los Trabajadores, afiliado a la IV Internacional, con arraigo en el proletariado azucarero de Tucumán, así como entre estudiantes y ferroviarios. Y en 1968 surgieron las Fuerzas Armadas Rebeldes, compuestas por personas que habían estado vinculadas al proyecto continental del Che, otros de la izquierda tradicional, algunos extraídos del peronismo, y hasta por gente sin militancia. También en ese año aparecieron las Fuerzas Armadas Peronistas, que al principio desearon implantarse en Tucumán, pero tras una seria derrota rural decidieron volcarse sobre las ciudades.

A mediados de 1969 la oposición al régimen militar argentino se realizaba por medio de las guerrillas urbanas y de las movilizaciones obreras. Estas tuvieron su esplendor en el “Cordobazo”, cuya influencia luego se extendió—

a Rosario, Mendoza y Tucumán, lo cual llevó al gobierno a decretar el estado de sitio, intervenir la CGT, clausurar periódicos y presenciar la multiplicación de la lucha armada; incrementaba entonces sus fuerzas el Movimiento Peronista Montoneros, nutrido con diversas corrientes progresistas, el cual propugnaba una alianza antimperialista, plural, contraria a la oligarquía y proclive a la reforma agraria, que modernizara mediante un socialismo nacional las tres banderas tradicionales del “justicialismo”. A su lado, en el propio 1970, el PRT hizo brotar al Ejército Revolucionario del Pueblo, que esgrimía el socialismo bajo conducción de una clase obrera aliada con campesinos pobres y pequeños burgueses urbanos, contra el imperialismo y la burguesía monopolista criolla. La cúspide política en este contexto, llegó en marzo de 1971 con el segundo “Cordobazo”, que hizo comprender a la alta oficialidad el peligro de incrementar la represión. Por ello los militares se decidieron a desandar su camino, y legalizar los partidos, liberar los salarios y convocar a elecciones. Sorprendidas, las guerrillas no tuvieron una respuesta adecuada; continuaron su lucha como si nada hubiera cambiado. Aunque algunas se fusionaron, las dos principales organizaciones, entre sí, no se entendieron, y continuaron un combate que las iba alejando de la población, pues esta mayoritariamente no comprendía la perseverante actividad de los guerrilleros, al estar muy ilusionada con el cercano proceso electoral. En ese ambiente, el candidato peronista ganó la presidencia con una plataforma de avanzada, lo cual llevó a las masas al delirio y las distanció aún más de cualquier manifestación de lucha armada. Entonces los montoneros se dedicaron a ocupar posiciones dentro del peronismo, en un empeño por llegar a controlar dicho partido. Mientras, el ERP se fundía con los restos de las FAL y las FAP, y rompía con el trotskismo para proseguir sus enfrentamientos con el ejército. Ambos fenómenos aterrorizaron a la derecha justicialista, que en el mismo 1973 obligaron a renunciar al recién investido presidente, y llamaron a las masas a elegir en su lugar al propio Juan Domingo Perón.

Uruguay

En Uruguay, tras casi un siglo de continuidad política, el cambio de partido gubernamental inició el cese del ingerencismo gubernamental en la economía, lo cual originó una espiral inflacionaria que mucho perjudicó a los asalariados,

y en especial a los jornaleros agrícolas. Los trabajadores del azúcar entonces se sindicalizaron para defenderse, marcharon pacíficamente desde el Norte hasta la capital, después solicitaron apoyo para ocupar los latifundios sin cultivar, y por último vieron como su vanguardia se inclinaba por la lucha armada. Dicha postura ocasionó un cisma en el Partido Comunista, cuya minoría maoísta se escindió en 1963 para crear un Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que al año se dividió en tres tendencias, de las cuales una estaba dispuesta a impulsar el combate guerrillero ciudadano. Esta corriente se vinculó después con los más decididos sindicalistas azucareros, así como con dirigentes socialistas y anarquistas o trotskistas y hasta católicos o sin partido, para crear el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, cuyo centro de operaciones se encontraría en Montevideo. En 1966 una Constitución nueva sustituyó en el país al ejecutivo colegiado por otro personalista, impulsó la monopolización de la economía, y permitió establecer “medidas prontas de seguridad” contra quienes la policía considerase “subversivos”. La guerrilla se dedicaba entonces sobre todo a buscar financiamiento mediante asaltos a casinos y bancos, en acciones no siempre bien comprendidas por la población. Después fugazmente ocuparon la ciudad de Pando en un operativo asombroso por su precisión, el cual fue seguido por otras acciones de semejante espectacularidad.

De forma paralela, sin embargo, también se desarrollaba otro acontecimiento extraordinario; comunistas, socialistas, demócrata-cristianos, facciones izquierdistas de los dos partidos tradicionales, así como elementos independientes, convergían para constituir en 1971 el civilista Frente Amplio. Coexistían así, respetándose pero diferentes, las dos proyecciones: electoral y armada. El gobierno, por su parte, no hizo distinciones; decretó el estado de guerra interno, incrementó la represión, multiplicó los asesinatos, asaltó locales del Partido Comunista y ametralló a sus militantes, y solo dejó al Parlamento como único baluarte legal sobreviviente. El MLN-T decidió entonces colocar al país en situación de guerra revolucionaria, pero se equivocó. No era todavía capaz de arrastrar a las masas tras sus objetivos; había subestimado la capacidad represiva del régimen al equiparar el ejército a la policía y carecía de vínculos eficientes con el Frente Amplio. La derrota de los guerrilleros ensanchó la ruta a la oficialidad golpista, que en 1973 transformó la Junta de Comandantes en el verdadero centro de poder, desde el cual se ordenó: la ocupación de radiodifusoras y periódicos, la disolución del Parlamento,

la clausura de la Confederación Nacional de Trabajadores, la proscripción del Frente Amplio y demás organizaciones partidistas, la conversión del principal estadio de la capital en monstruosa y gigantesca prisión. Era el fascismo.

El Sandinismo y su influencia

En Nicaragua, el ajusticiamiento del tirano Somoza estremeció las conciencias revolucionarias, que volvieron a pensar en la lucha armada. Pero la pronta muerte en combate de Ramón Raudales, veterano del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, abrió otro compás de esfera. Después la derrota de El Chaparral volvió a postergar un empeño duradero. Hubo que esperar la fundación del Movimiento Sandinista por Carlos Fonseca Amador, para que se unieran las tradiciones revolucionarias nicaraguenses con las concepciones más avanzadas sobre la sociedad. Luego se prepararon condiciones por Río Coco y Bocay para el desarrollo guerrillero, pero cuando en 1963 los primeros grupos rebeldes comenzaron a operar, equivocadamente lo hicieron por un territorio más alejado. Ese error táctico dentro de una concepción general correcta, reafirmó a los revolucionarios lo acertado de realizar un trabajo político previo con las masas, en las zonas de futuras operaciones. Dicho revés no implicó tampoco la desaparición del FSNL, pues esta organización también realizaba ya actividades clandestinas en las ciudades. Primero dichas tareas se llevaron a cabo mediante otras fuerzas existentes en el país, pero desde 1966 se juzgó pertinente solo vincularse con la población por medio de mecanismos propios. En esa misma época, la torpeza gubernamental de los herederos de la dictadura nepotista lanzó a un grupo de burgueses a la oposición, quienes a principios de 1967 convocaron a una pacífica demostración de protesta. Entonces se desató a la Guardia Nacional, que masacró a trescientas personas; el régimen había perdido su antigua flexibilidad negociadora y pasaba a confiar solo en el terror.

Frente a la represión, el FSLN acometió la guerra popular prolongada en el territorio de Pancasán, que a pesar de haber terminado en un fracaso militar constituyó un éxito político, pues los campesinos se sumaron al contingente insurrecto.

El terremoto que asoló a Managua en 1972 fue la línea divisoria tras la cual empezó la descomposición del somocismo, al ser convertida la reconstrucción de la capital en un negocio puramente familiar, por la camarilla gobernante.

Esto, cuando el FSLN representaba ya una fuerza capaz de atraer a muchos descontentos, y cuyas acciones guerrilleras por las montañas alcanzaban cada día una importancia mayor. En el seno de la organización, sin embargo, hubo quienes deseaban incentivar la lucha de los pobres en las ciudades, e hicieron surgir la Tendencia Proletaria, que pensaba incluso en un proceso insurreccional urbano. Y después de la muerte en combate de Carlos Fonseca en noviembre de 1976, dentro del sandinismo brotó también la Tendencia Tercerista, que insistía en la conveniencia de unir a todos los opuestos al régimen en un proceso de creciente actividad político-militar, bajo la hegemonía armada y partidista del FSLN. Mientras, la oposición burguesa también se animaba, pero su problema era que no sabía cómo triunfar. Por eso el Grupo de los Doce representó el vínculo mediante el cual los revolucionarios entraron en contacto con los partidos tradicionales contrarios al somocismo. Al mismo tiempo, el ascendente ardor de las masas se evidenció en febrero de 1978, cuando la comunidad indígena de Monimbó—barrio de Masaya—espontáneamente se sublevó, lo cual fue un extraordinario empuje para la rebelión. Esta se incrementó con las ofensivas guerrilleras en Granada y Rivas, la toma del Palacio Nacional, y los alzamientos urbanos de León, Estelí, Masaya y Chinandega, los cuales a pesar de haber sido derrotados por medio de crueles e indiscriminados bombardeos, fortalecieron militarmente a los revolucionarios. Luego se formaron los Comités de Defensa Civil y Popular, que se aglutinaron con otras organizaciones en el Movimiento del Pueblo Unido. Por último, el FSLN se reunificó mediante una Dirección Nacional Conjunta que emitió un Plan General de Insurrección, el cual comprendía seis frentes de guerra distintos. El esfuerzo bélico fue complementado con la creación del Frente Patriótico Nacional, concebido para brindar un espacio político en la lucha a todos los enemigos de la tiranía. Esto permitió decretar una huelga política general que a los cinco días fue seguida por el levantamiento de Managua. Después se derrotó lo que aún quedaba de la Guardia Nacional, y el 19 de julio de 1979 se ocupó la capital, donde se estableció la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Empezaba la Revolución.

El Salvador

En El Salvador, el respaldo del Partido Comunista en 1969 a la mal llamada Guerra del Fútbol originó una crisis en dicha militancia, que provocó la separación

de quienes luego fundaron las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. Después, el fraude electoral de 1972 motivó que jóvenes del Partido Demócrata-Cristiano se escindieran para unirse enseguida con dirigentes de la Juventud Comunista, en el Ejército Revolucionario del Pueblo, del cual más tarde se desgajó el Frente de Acción Popular Unificado por aquellos deseos de concientizar a las masas antes de lanzarse a la lucha armada. Pero en las FAPU hubo quienes pensaron que su participación en los combates se demoraba mucho, y en 1975 forjaron las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional. Ese mismo año, en el ámbito político se formó el Bloque Popular Revolucionario, el cual abarcaba a sindicalistas, jornaleros agrícolas, educadores y campesinos que se relacionaban con las FPL. Y una sangrienta represión gubernamental a una pacífica manifestación opositora, originó las Ligas Populares 28 de Febrero que se vincularon al ERP.

La trascendental victoria sandinista conmovió a Centroamérica y en especial a El Salvador, donde jóvenes oficiales ejecutaron un golpe de Estado y establecieron una Junta Revolucionaria de Gobierno cívico-militar. Pero en esta, la oficialidad “dura” desplazó a la “progresista” y además forzó la renuncia de los civiles, aunque en enero de 1980 se alió con la Democracia-Cristiana. Esto ocasionó la división de dicho partido, cuya izquierda creó el Movimiento Popular Social Cristiano. Fue entonces que también se estructuró el Partido Revolucionario de los Trabajadores, cuyas relaciones con los humildes se llevaban a cabo por el Movimiento Popular de Liberación. Después del proceso de fraccionamiento y multiplicación de las organizaciones revolucionarias, tanto de las vanguardias armadas como de las agrupaciones de masas, comenzó el necesario acercamiento. Así las FPL, las FARN y el Partido Comunista constituyeron la Dirección Revolucionaria Unificada, y en brevísimo lapso las BPR, el MPL, FAPU, LP-28, la marxista Central Unitaria Sindical, y el partido Unión Democrática Nacionalista, estructuraron la Coordinadora Revolucionaria de Masas. Y el primero de abril de 1980, el Movimiento Nacional Revolucionario y el MPSC, así como técnicos, profesionales, educadores y pequeños empresarios daban vida al Frente Democrático Salvadoreño. Dos semanas más tarde el FDS y la CRM, juntos, engendraban el Frente Democrático Revolucionario. Por último, en diciembre de ese año la DRU se integró con el ERP y el PRT en el frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que en muy poco tiempo se asoció con el FDR mediante una Comisión Político-Diplomática.

El FMLN lanzó el 10 de enero de 1981 una ofensiva militar para sublevar a la población rural, pues en las urbes primaba el terror represivo. Gradualmente en los campos se transitó de acciones bélicas aisladas a operaciones planificadas a escala nacional, con baluartes político-militares rebeldes en vastos territorios, sobre todo del Norte de ese pequeño país. Después comenzaron las incursiones sobre las ciudades, algunas como Usulután ocupadas parcialmente durante casi una semana. Pero ahí, el avance revolucionario se detuvo, pues no ocurrió un proceso insurreccional ciudadano. Se produjo entonces una especie de equilibrio, que la Junta deseó romper al convocar a una Constituyente, mientras recibía ayudas cada vez mayores de Estados Unidos para vencer a los alzados. Pero no lo logró, y en 1983 el FMLN retomaba sus ofensivas sobre las ciudades, y se llegó hasta ocupar la de Berlín. Luego, sin embargo, los revolucionarios enfrentaron una profunda crisis interna, debido a serias pugnas concernientes a la política de alianzas. El principal choque se produjo entre los dos máximos dirigentes del FPL, al defender el jefe posiciones de militarismo vanguardista, y su segunda al mando enarbolar el criterio de entenderse en las ciudades con otros sectores sociales, para impulsar el languideciente movimiento de masas. El conflicto llegó a su desenlace con la derrota política de este, que entonces instigó el asesinato de aquella y después se suicidó.

Tras la Constituyente se celebraron elecciones que ganó el fundador de la Democracia Cristiana, quien aun disfrutaba de apoyos en la pequeña y mediana burguesía, así como en los grupos de asalariados ideológicamente más atrasados. De inmediato el nuevo presidente orientó un gran empeño guerrillero para vencer a los revolucionarios, pues contaba con cuantiosa ayuda bélica suministrada por Estados Unidos. Pero no pudo derrotar a la insurgencia. Entonces dio un giro y aceptó el reiterado planteamiento del FMLN-FDR concerniente a una salida negociada al conflicto, tras lo cual se creó una comisión bilateral encabezada por un obispo, que buscara la forma de hacer la paz. Este acuerdo, sin embargo, no desarmó al ejército, que perseveró en sus gigantescas ofensivas apuntalado financieramente por las astronómicas ayudas estadounidenses, a pesar de lo cual tampoco derrotó en los campos a la insurrección, cuya lucha empezaba a ser acompañada por un emergente movimiento civilista antigubernamental que resurgía en las ciudades. En ese contexto el FMLN-FDR renovó su ofrecimiento de lograr una salida política, que desembocó en los conceptos de: cese al fuego bilateral, alguna Comisión Nacional de Reconciliación,

y una amnistía para ambos contendientes. Después una multipartidaria de las organizaciones políticas legales se reunió con la Comandancia General insurgente, aunque en ningún momento se detuvieron las hostilidades. Sin embargo, a pesar de los avances ofensivos de los revolucionarios, no se produjo una insurrección generalizada. Ni a pesar de la enorme ayuda estadounidense, el ejército pudo refluir el poderío militar insurrecto.

A partir de 1990 los bandos dialogantes contaron con la mediación de un representante del Secretario General de la ONU, lo cual impulsó el entendimiento que puso fin a la guerra el 1 de febrero de 1992. El pacto firmado contemplaba una serie de reformas en la sociedad salvadoreña, así como la transformación del FMLN en partido con vida regular en todos los procesos electorales. Se inauguraba así una era nueva para El Salvador.

Guatemala

En Guatemala, derrocado el democrático gobierno constitucional de Jacobo Arbenz, se restableció la hegemonía de los grandes “barones del café”. Entonces se suspendieron las garantías, se prohibieron los partidos y organizaciones populares, se anuló la reforma agraria. Por ello desaparecieron las cooperativas campesinas, se devolvieron las tierras a la oligarquía y a la United Fruit Company, y se desató una brutal represión. Eso disgustó a una parte de la oficialidad joven, la cual en noviembre de 1960 inició una sublevación que fracasó debido a falta de coordinación, titubeos, y sobre todo por los bombardeos aéreos de los contrarrevolucionarios, que financiados por los Estados Unidos se preparaban en este país para atacar a Cuba por Playa Girón. Luego de ser amnistiados, algunos de los ex-militares guatemaltecos decidieron impulsar la lucha guerrillera para lo cual formaron el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, cuyos efectivos se implantaron por la zona de Izabal, donde la UFCO tenía grandes propiedades. Con ellos colaboró el ilegalizado Partido Guatemalteco del Trabajo, que a la vez creó su propia fuerza insurrecta en la Baja Verapaz. Al mismo tiempo las manifestaciones estudiantiles fueron reprimidas, lo cual condujo a los más audaces de ese grupo social a forjar el M-12-IV, que junto al MR-13-N y al PGT constituyeron a finales de 1963 las Fuerzas Armadas Rebeldes. Pero en estas pronto comenzaron las discordias; derrotado el “frente” de Baja Verapaz, el PGT se desanimó—y retornó—

a concepciones “obreristas”, mientras que los ex-oficiales se dividían por sus proyecciones acerca del futuro de los combates armados. Una tendencia, que al principio había desarrollado una inclinación de “vanguardismo militarista”, luego progresivamente cayó bajo la influencia del trotszkismo mexicano afiliado a la SLATO, tras lo cual abrazaron las tesis del “agrarismo” y “autodefensa” campesina. La otra, dirigida por Luis Augusto Turcios Lima, rechazaba cualquier alianza no dirigida a la toma del poder así como todo tipo de sectarismo contrario a un hábil política de alianzas. Esta clara postura revolucionaria atrajo al PGT, con el cual se reconstituyeron las FAR, que a pesar de proclamar la guerra popular prolongada del campo a la ciudad, adoptaba prácticas “foquistas” al creer que iban espontáneamente a convertirse en centro popular del proceso revolucionario. No obstante, las FAR se desarrollaron entre los ladinos o mestizos, en parte minifundistas, que sin embargo solo constituía una minoría de la población; la mayoría, en un 70 % indígenas aglutinados en múltiples y heterogénea étnias, no se incorporó a la lucha. Solo seis kakchiqueles se sumaron a las FAR en una pequeña comunidad. En las ciudades, por su parte, no eran los obreros quienes principalmente respaldaban a dicha organización. De todas formas, la incapacidad de los militares para derrotar a las guerrillas asentadas en una parte del país, condujo a la élite gobernante a concebir un proceso reformista, para lo cual facilitaron la elección de un autodenominado “tercer presidente de la revolución”.

La maniobra surtió efecto, las FAR se dividieron, algunos se desmovilizaron, y todos los combates cesaron. Al comprender el error, Turcios trató de reanimar la lucha en momentos en que la otra tendencia rompía con el trotszkismo, pero en muy poco tiempo murió en un embrollado accidente automovilístico. Entonces las renovadas FAR volvieron a padecer las disputas internas, que las llevaron a dividirse, desorganizarse y a la inacción.

En 1971 las FAR se auto-analizaron y concluyeron que debían acercarse al pueblo y ganar su confianza, así como realizar mucho trabajo concientizador antes de reiniciar los combates. Una parte, sin embargo, se escindió, pues entendía que los empeños deberían concentrarse sobre los indígenas de la Sierra Madre, y para eso crearon la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas. Al mismo tiempo y sin vinculación con ellos, otro grupo de revolucionarios se dedicó a realizar proselitismo con los aborígenes a fin de relacionarlos con el Ejército Guerrillero de los Pobres, recién constituido en la zona de El Quiché.

El triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 impulsó en Guatemala el reinicio de la lucha guerrillera, tras lo cual las FAR y el EGP se vincularon a una pequeña escisión del PGT dispuesta a sumarse al combate armado urbano. Más tarde, junto a la ORPA, se integraron todas a principios de 1982 en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En tres años de guerra la URNG le ocasionó mil muertos al ejército, que se reorganizó y respondió con tácticas de tierra arrasada en el Altiplano, a cuya población se le reconcentró en buena medida en las llamadas “aldeas estratégicas”, mientras a otra parte se le encuadró en las “patrullas civiles”. Pero como la extrema violencia no inclinó la balanza militar a favor del gobierno, dominado desde hacía casi veinte años por el ejército, los oficiales más avezados políticamente impusieron una repetición de la eficiente maniobra reformista de antaño, y a principios de 1986 decidieron devolverle una faz civil a la conducción de la sociedad. Recurrieron para ello a la Democracia Cristiana, que nunca había participado del poder e incluso a veces hasta había sufrido alguna persecución.

Sin abandonar las armas, la URNG propuso entonces al nuevo presidente la celebración de conversaciones para alcanzar la paz. Este aceptó a mediados del año siguiente y envió una delegación a que dialogara con los rebeldes, lo cual ocasionó fisuras en el ejército, una parte de cuya oficialidad intentó reiteradamente golpes de Estado. Después se inició un Diálogo Nacional entre la recién conformada Comisión Nacional de Reconciliación y la URNG, tras el cual se firmó un “Acuerdo Básico para la búsqueda de la paz por medios políticos”, que impulsó las negociaciones. El avance de estas permitió que al cabo de un tiempo ellas prosiguieran de forma directa entre el gobierno y los revolucionarios, cuyas conversaciones luego se enriquecieron con la participación de enviados de la ONU. Hasta que a mediados de 1994 se firmaron varios acuerdos concernientes: los derechos humanos, el calendario de las negociaciones, una Comisión para esclarecer las violaciones y atrocidades. Y a principios del año siguiente se rubricó otro, que reconocía a Guatemala como país multiétnico, pluricultural y multilingüe.

Alvaro Arzú ocupó la presidencia con la promesa de entrevistarse con la Comandancia de la URNG e impulsar la paz, lo cual facilitó que en marzo de 1996 se proclamara el cese al fuego, y a los dos meses se iniciara la firma de una serie de acuerdos, entre los cuales había uno sobre la inserción de la guerrilla en la vida política legal guatemalteca. Hasta que el 29 de diciembre de ese año

se estableció—el “Acuerdo de Paz firme y duradera” que ponía fin al prolongado y cruel conflicto. Después se redujo el ejército en un tercio, se desarmó la URNG, entró en funciones la Oficina de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra, se instaló la Comisión para la Reforma Educativa así como el Foro Nacional de la Mujer. Pero a mediados de año se constató que la Reforma Constitucional no avanzaba bien. Vencidas esas dificultades en el Congreso, la Corte de Constitucionalidad Nacional suspendió la aplicación de un sinnúmero de acápites transformados, a la vez que el Tribunal Supremo Electoral convocaba a un referéndum para ratificar o revocar en bloque los mencionados cambios a la Ley Fundamental. En este, debido a la escasa participación electoral, el voto resultó adverso por poco más de la mitad de los sufragios emitidos, lo cual condujo a un clima de incertidumbre en el país.

Persistente violencia en Colombia

En Colombia, el triunfo de la Revolución Cubana indujo al gobierno de ese país andino a liquidar la sobreviviente insurgencia comunista, por la cual en 1962 con siete mil soldados lanzó una ofensiva que no logró sus objetivos. Entonces el ejército elaboró un plan mucho más complejo, y a los dos años desató un feroz y voluminoso ataque. Ante la desigualdad de fuerzas, los revolucionarios desalojaron las zonas que ocupaban, pero a la vez decidieron abandonar sus viejas concepciones de autodefensa para en el futuro luchar por el poder. Terminados estos combates, el Partido Comunista convocó en 1965 a un congreso, en el cual los proclives a la lucha armada se dividieron en dos tendencias. Los veteranos de las cuatro antiguas “republicuetas” se constituyeron en Bloque Guerrillero Sur, y en 1966 crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, con varios “frentes” de operaciones. Los maoístas formaron una agrupación “marxista-leninista” en defensa de la guerra popular prolongada del campo a la ciudad, para lo cual a finales de 1967 constituyeron el Ejército Popular de Liberación.

El triunfo de la Revolución Cubana estimuló a los “gaitanistas” del Partido Liberal a desgajarse en el Frente Unido de Acción Revolucionaria, seguido de una escisión más moderada que acaudillaban algunos antiguos ex-guerrilleros, denominada Movimiento Revolucionario Liberal. Sin embargo los jóvenes del MRL pronto exigieron un proyecto transformador como el cubano, y formaron

la Juventud del Movimiento Revolucionario Liberal. Y casi al mismo tiempo surgió el Movimiento de Obreros, Estudiantes y Campesinos, también admirador del triunfo insurreccional en la mayor de las Antillas. Luego, en 1963, muchos del JMRL se unieron a unos estudiantes aglutinados en la “Brigada de Liberación José Antonio Galán” —todos fervientes admiradores de la Revolución Cubana— y fundaron al año el Ejército de Liberación Nacional, cuyo mayor éxito fue político al incorporárseles el sacerdote Camilo Torres. Este era muy apreciado en las ciudades, donde había organizado a los humildes en el Frente Unido de Movimientos Populares, que mediante su publicación semanal editada en cincuenta mil ejemplares exigía una reforma agraria así como la expropiación de los bancos y de las riquezas de la Iglesia Católica. Pero el modesto cura cayó como simple soldado del ELN el 15 de febrero de 1966.

La muerte en combate de Camilo Torres fue como una señal de que se había iniciado una etapa de reflujos en el movimiento guerrillero de Colombia, lo cual generó fuertes discusiones en el seno de las distintas organizaciones armadas. Así, con frecuencia los frentes de lucha se escindieron y subdividieron, para luego reunirse y volver a fraccionarse. En ese contexto ocurrió el gran fraude electoral del 19 de abril de 1970 contra la novel Alianza Nacional Popular, cuya dirigencia lo aceptó bajo la presión de los otros dos partidos pero ocasionó el rechazo de una parte de la militancia, que dirigida por Carlos Toledo Plata, fomentó la ANAPO Socialista. Hacia esta confluyeron entonces muchos discrepantes de las paralizadas fuerzas insurrectas, en las cuales se debatía acerca de la táctica a seguir ante la rápida inversión de la estructura demográfica del país, cuya población había pasado a ser preponderantemente urbana. La afluencia de esas nuevas incorporaciones mucho influyó en que la ANAPOS pronto se transformara en movimiento político-militar 19 de abril, o simplemente M-19, que se dio a conocer a principios de 1974 con algunas acciones urbanas. También por esos momentos el EPL inauguró un “frente” ciudadano, al hacer formal renuncia de sus previas concepciones maoístas. El problema era, que la inquietud crecía entonces entre los asalariados de las urbes, que incluso convocaron a un Paro Cívico Nacional el 14 de septiembre de 1977. El gobierno trató de impedir que este ocurriese y desató una feroz represión, lo cual a su vez originó el surgimiento de la llamada Autodefensa Obrera, organización político militar convencida de la lucha armada urbana. La ADO, sin embargo, luego extendió sus operaciones a las zonas rurales, donde estableció sus Fuerzas

de Autodefensa Populares. Por su parte el ELN culminó su proceso reorganizativo, y a la par de sus multiplicados frentes en el campo impulsó sus actividades en las ciudades. A su vez las FARC habían adquirido tal amplitud combativa, que instituyeron un Secretariado del Estado Mayor Central con tareas de planeamiento a escala nacional para sus más de veinte frentes de batalla. El campo también atrajo la atención del M-19, que en marzo de 1981 protagonizó un importante desembarco guerrillero por las costas del Pacífico, cuyos integrantes avanzaron por la selva hasta Caquetá y Puumayo, donde inauguraron nuevos frentes de guerra que después se ramificaron hacia Huila y Nariño. Desde entonces los distintos grupos revolucionarios fortalecieron su control sobre las vías fluviales y terrestres, multiplicaron la toma de poblaciones y los ataques a cuarteles así como a las columnas del ejército en las vastas zonas rurales. Pero en las ciudades, la movilización popular y los combates seguían retrazados.

La campaña electoral del conservador Belisario Betancourt en 1982 giró alrededor de los posibles acuerdos de paz, la desarticulación de las bandas paramilitares, y la represión al narcotráfico. Pero no obstante ese triunfo civilista en las urnas y un ulterior decreto de amnistía política, el ejército mantuvo las ofensivas anti-insurgentes y su colaboración con las bandas asesinas. El nuevo presidente llegó hasta: exigir la renuncia del Ministro de Defensa, convocar a un gran diálogo nacional, realizar reformas sociales y constitucionales. Pero nada cambió, y la guerra hasta se hizo más intensa. Mientras, la insurgencia auspiciaba el desarrollo cívico de la sociedad al respaldar el surgimiento de la Unión Patriótica, nueva fuerza partidista, abierta a todos por la amplitud de su programa, que se podría sintetizar en tres puntos: depurar las fuerzas armadas y separarlas del narcotráfico así como de las bandas paramilitares; dialogar con la guerrilla; reformar en profundidad la Constitución. La respuesta no se hizo esperar. El 11 de octubre de 1987 el presidente de la UP fue asesinado.

El cuatrenio presidencial de Virgilio Barco se caracterizó por un cambio de estilo en la búsqueda de la paz, pues pretendió reducir toda negociación a los temas vinculados con el desarme y la desmovilización de los insurgentes, para que luego se incorporasen a la vida electoral. Se convocó entonces a una Comisión de Convivencia Democrática, tras lo cual el M-19 declaró un cese al fuego unilateral, y comenzó un diálogo con el gobierno. De este surgió en julio de 1989 un Pacto Político bilateral, que llevó al M-19 a dejar

las armas y transformarse en partido legal, con la promesa gubernamental de reformar la Constitución y promover una Ley de Indulto en el Congreso. Pero dado que en este, esas cuestiones no avanzaban, surgió la propuesta de celebrar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces el M-19 decidió quebrar el tradicional bipartidismo colombiano, y se acercó a la UP para acudir a las elecciones generales de 1990. Luego el gobierno instaló comisiones de negociación con los insurgentes del EPL, el PRT, y Quintín Lame, los cuales finalmente se desmovilizaron.

La mayoría de los guerrilleros que abandonaron la lucha armada se integraron a la Alianza Democrática M-19, y con ella acudieron a las elecciones para la Constituyente, en la que participaron como la segunda fuerza política por haber obtenido el 28 % de los votos, cifra solo ligeramente superada por el Partido Liberal. La nueva Constitución, sin embargo, no resultó muy avanzada, y su principal logro estribó en contar con disposiciones especiales que facilitaban la reinserción en la vida civil de los antiguos guerrilleros. Los combates, no obstante, continuaron, hasta cuando el nuevo presidente —César Gaviria— aceptó los contactos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Pero al no progresar dichos encuentros, el gobierno decretó la “guerra integral” a los insurrectos y declaró que ellos estaban vinculados al narcotráfico; confiaba en dar una solución militar al conflicto, pues la CGSB se descomponía al desarrollar sus integrantes estrategias de lucha divergentes.

La situación de acerbados combates se mantuvo hasta que Ernesto Samper asumió la presidencia, con una posición muy debilitada por haber sido acusado de recibir fondos del narcotráfico para su campaña electoral. Entonces las FARC anunciaron que retomarían el diálogo si el gobierno retiraba sus tropas del municipio de La Uribe en el Meta, y desarmaba a los grupos paramilitares. Aunque el presidente deseaba realizar concesiones el ejército se opuso, y desarrolló nuevas y mayores ofensivas que —sin embargo— terminaron casi siempre en victorias rebeldes; en año y medio las FARC capturaron nueve bases gubernamentales y extendieron sus acciones a todo el territorio colombiano.

A pesar de la furiosa oposición de la derecha y de las fuerzas armadas, para las nuevas elecciones presidenciales los candidatos empezaron a tender puentes hacia los insurgentes; en especial lo hacía el conservador Andrés Pastrana, quien prometió retirar al ejército de cinco municipios y entrevistarse directamente con Manuel Marulanda, líder histórico de las FARC. A partir de esos

presupuestos, luego de ocupar la presidencia, Pastrana impulsó las conversaciones sobre un amplio espectro de temas, pero al mismo tiempo viajó a Estados Unidos en busca de apoyo. Surgió así el Plan Colombia, que implicaba un creciente involucramiento estadounidense contra las guerrillas colombianas, acusadas de ser terroristas y agentes del narcotráfico internacional.

En ese desolador contexto se convocaron a elecciones generales para el año 2002, sin que sus resultados permitiesen el menor esclarecimiento del sombrío panorama existente en esa desgarrada república.

Nacionalismo revolucionario

El nacionalismo revolucionario de los militares, en América Latina surgió después del triunfo de la Revolución Cubana. Esa tendencia deseaba modernizar la sociedad, transformándola, en países donde no existía gran proletariado ni fuerte burguesía nacional, y mucho menos partidos políticos de avanzada capaces de tomar el poder o mantenerlo firmemente entre sus manos. Las tres principales manifestaciones de ese progresista fenómeno tuvieron lugar en República Dominicana, Panamá y Perú.

El ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo y la ulterior fuga de su familia, abrió el camino para que en República Dominicana un improvisado Consejo de Estado confiscase en 1962 todas las propiedades del difunto y su parentela, de enorme envergadura. Pero el proceso democratizador fue cortado por la cúpula militar, que apresó al gobierno y derogó las disposiciones anti-trujillistas. Entonces sucedió lo imprevisible; las fuerzas armadas se dividieron, y su sector más sano canceló el golpe de Estado y convocó a elecciones. El nuevo presidente rubricó una nueva y progresista constitución, que sin embargo no pudo poner en práctica pues otra asonada golpista lo expulsó del cargo. Después, la represión a las manifestaciones estudiantiles alimentaron un incipiente movimiento guerrillero, cuya multiplicidad conspiró contra su permanencia; dispersa, inexperta y sin abastecimientos, la insurgencia fue derrotada en unas semanas. La supremacía reaccionaria parecía asegurada, cuando el 24 de abril de 1965 un grupo de jóvenes oficiales encabezados por el coronel Francisco Caamaño Deñó, se sublevó en defensa de la derogada constitución. Reestablecida la legalidad democrática, el resto del ejército casi de inmediato se volvió contra ella, para reinstaurar el viejo régimen de privilegios.

Ante la gran desigualdad de efectivos, Caamaño y sus compañeros tomaron la trascendental decisión de armar a las masas populares, conducidas con frecuencia por los antiguos guerrilleros. Esta conjunción de fuerzas debía ganar la batalla decisiva frente a la reacción, cercada en la base militar de San Isidro, pero esa misma noche el presidente de Estados Unidos anunció el envío de sus tropas contra la República Dominicana. Al día siguiente Caamaño llamaba a luchar contra los invasores, mientras que poco después —el 5 de mayo— ambas Cámaras del Congreso elegían presidente de la República al indomable coronel.

El desequilibrio, no obstante, era abismal y la situación se tornó desesperada cuando la Organización de Estados Americanos bendijo el desembarco de las 42,000 “marines”. Sin alternativa, los patriotas tuvieron que aceptar un alto al fuego, seguido el 31 de agosto de 1965 por un Acta de Reconciliación.

Panamá

En Panamá, a principios de la década de los años sesenta, las protestas estudiantiles y populares contra el enclave colonial de la Zona del Canal se vinculaban cada vez más con las demandas de mejoras económicas para las masas de humildes y desposeídos, tal y como sucedió con la famosa Marcha del Hambre. Pero el descontento súbitamente se multiplicó luego de que en enero de 1964 los “zonianos” norteamericanos izaran su bandera sin que al lado ondeara la panameña, como estipulaban los acuerdos vigentes. Entonces los ofendidos jóvenes istmeños penetraron en el enclave para hacer efectivos sus derechos nacionales y fueron salvajemente repelidos por las tropas imperialistas, que les ocasionaron veintiún muertos y medio millar de heridos. Después de esta masacre Panamá no volvió a ser el mismo. Surgió un breve intento guerrillero en la montañosa región de Ciri Grande, mientras el gobierno ordenaba un incremento generalizado de la represión. Esto, sin embargo, originó una concientización de muchos oficiales en la Guardia Nacional, que dirigida por el general Omar Torrijos tomó el poder en Octubre 11 de 1968. De inmediato se disolvió el nada representativo Congreso de la República; se suprimieron los partidos burgueses; se decretó una amplia amnistía para los presos políticos; se derrotó un intento de golpe militar derechista; se dictó una ley de Reforma Agraria destinada a expropiar tierras baldías, para organizar en ellas un tipo de cooperativa llamadas Asentamientos Campesinos. Al mismo tiempo el gobierno

revolucionario de los militares nacionalistas creó diversas instituciones crediticias para ayudar a los asentamientos así como a los pequeños y medianos productores. El Estado también auspició el desarrollo del cobre, la pesquería, el turismo, adquirió la Compañía de Fuerza y Luz, y lanzó una vigorosa campaña diplomática a favor de establecer la soberanía panameña sobre el Canal. Esta desembocó, al cabo de siete años, en el Tratado Torrijos-Cárter de 1977, el cual dispuso que en el plazo de 23 años, paulatinamente, todos los derechos jurisdiccionales de la zona pasaran a las autoridades istmeñas. Luego las masas populares aprobaron en referéndum el referido acuerdo, tras lo cual el país marchó hacia una original forma de institucionalización: la Asamblea de Corregimientos.

El horizonte político panameño parecía despejarse, cuando en 1981 tuvo lugar un sospechoso accidente de aviación que tomó la vida de Torrijos, lo cual tornó mucho más imprevisible el futuro de esa nación.

Perú

En Perú, una vez derrotados los empeños guerrilleros del MIR y el ELN, la Fuerza Armada encabezada por el general Juan Velasco Alvarado, el 3 de octubre de 1968 tomó el poder y anunció el Plan Inca. Este concebía una radicadísima reforma agraria y oficializar el quechua, así como la nacionalización de las riquezas naturales y los consorcios extranjeros, que en ambos casos integrarían un pujante capitalismo de Estado. Esas transformaciones nacionalistas trascendieron el carácter democrático y burgués, cuando el primero de mayo de 1974 Velasco anunció en una gran concentración por el día de los trabajadores, nuevas leyes de contenido muy popular sobre la propiedad en general y la prensa en particular. La primera medida significaba una reestructuración integral de la economía, en la cual el Estado sería el pivote principal al preservar bajo su control los servicios básicos y las mayores industrias. En segundo lugar se encontraban el resto de las compañías aún pertenecientes a los capitalistas criollos, cuya esencia se deseaba alterar mediante la creciente participación de los trabajadores en la posesión de las acciones, que deberían emitir ese nuevo tipo de “comunidad”; esto representaría un avance *sui-generis*, paulatino pero sistemático, hacia la desaparición de los intereses privados en dichas empresas. En tercer sitio estaba la pequeña propiedad, que se dejaba

incólume. El decreto sobre la prensa, por su parte, entregaba los diez principales periódicos a las representaciones de diversos sectores laborales del país. Pero estas disposiciones traspasaban lo tolerable por la burguesía, que se incorporó a la contrarrevolución. Mientras, los proclives al progreso estaban divididos; no había fuerza política ni sindical común que los aglutinara y el Sistema Nacional de Movilización Social, de creación gubernamental, no había llegado a vincular a las masas de manera efectiva con el poder. Este seguía siendo militar, con su tradicional verticalidad, y sin que las fuerzas armadas hubiesen sido depuradas o alteradas; solo en su cúspide, el ejército contaba con un grupo de radicales mestizos, los “generales cholos”, decididos a revolucionar la sociedad. Y en esas circunstancias, cuando la lucha de clases arreciaba, Velasco Alvarado enfermó de gravedad, lo cual rápidamente debilitó el control de sus adeptos sobre el resto de los mandos, de heterogénea composición. Entonces sectores moderados de la oficialidad a finales de 1975 dieron un sutil golpe de Estado, mediante el cual a partir de entonces revertieron buena parte de los avances llevados a cabo en esta sociedad.

Sendero luminoso proscrito

En Perú, a la convocatoria de los militares en 1978 para una Constituyente, grupos clandestinos respondieron llamando al abstencionismo y vitoreando la lucha armada. Eran los militantes del proscrito Partido Comunista por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui, el cual representaba un desgajamiento maoísta con rígida, vertical y autoritaria estructura, que rechazaba cualquier vínculo con la legalidad, y absolutizaba los preceptos de llevar una guerra prolongada del campo a la ciudad. Se regía por el “pensamiento Gonzalo” —seudónimo de Abimael Guzmán— quien criticaba mucho a la Revolución Cubana y se auto-proclamaba continuador del “marxismo-leninismo-maoísmo”, ya en su cuarta fase de lucha por la revolución mundial y contra todos los revisionismos, desde el bastión ortodoxo situado en el corazón de los Andes. El PC-SL planteaba tres pasos hacia la insurgencia: boicotear las elecciones presidenciales de 1979 e impulsar los campesinos a ocupar tierras; realizar propaganda y agitación así como sabotajes; conformar destacamentos armados y guerrillas. Durante 1980 los “senderistas” llevaron a cabo 219 atentados y sabotajes, y de enero a octubre del siguiente año habían efectuado 692, cuando se lanzaron a ocupar el cuartel de la guardia civil en Tambo, provincia

de La Mar. Entonces el recién electo gobierno proclamó el “estado de emergencia” en esa y cinco provincias más, a las cuales despachó sus temidos destacamentos punitivos conocidos como “Sinchis”. Pero la represión en vez de frenar la lucha, la acicateó, y en marzo de 1982 los senderistas ocupaban ya la ciudad de Huamanga, con ochenta mil habitantes. Después el PC-SL comenzó a extender su radio de acción hacia otras regiones, pues hasta Lima sufrió dos gigantescos apagones. Ese año finalizó con la militarización completa de otros departamentos y provincias, en las cuales las fuerzas represivas habían desatado un insoportable clima de temor. Pero el ejército comprendió que la ilimitada violencia reforzaba la voluntad popular de apoyar a los rebeldes, y cambió de estrategia; además los militares se dieron cuenta de que existían heterogeneidades entre las comunidades campesinas, y decidieron estimular la lucha de unos comuneros contra otros. Esta práctica fue facilitada por el dogmatismo maoísta del PC-SL, que aplicaba de manera mecánica la experiencia china; cuando Sendero controlaba una zona, pretendía imponer un régimen autárquico o de autoconsumo, con el propósito de privar a las ciudades de alimentos y así forzarlas a entenderse con los revolucionarios. No tenían en cuenta los vínculos ya forjados entre campesinos y comerciantes, lo que provocaba el disgusto de aquellos —que perdían el mercado— e inducía a estos a comprar en otros sitios; siempre podían adquirir productos enlatados provenientes del exterior. Entonces el PC-SL decidió ejecutar a algunos comerciantes, lo cual solo ahondó el alejamiento de los habitantes urbanos con respecto a esa organización. A la vez, el desenfreno de los campesinos daba rienda suelta a su sed de venganza contra quienes siempre los habían oprimido, por lo cual aplicaban directamente su propia justicia a: jueces, alcaldes, usureros, mayoresales, terratenientes.

En los comicios de 1985 triunfó Alan García, candidato de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que nunca había ocupado la presidencia a pesar de haber sido fundada hacía sesenta años. Aquellos propósitos que inicialmente había formulado el APRA, fueron modernizados por el joven presidente bajo el tema de “el aprismo es un socialismo latinoamericano”, el cual criticaba la práctica según la cual todo el Perú trabajaba para una minoría que en la capital tenía un *american way of life*; también hablaba de un control gubernamental del petróleo, expropiar bancos, reducir el pago de la deuda externa al 10 % del valor de las exportaciones, así como de dar mayor autonomía a departamentos y provincias. Esa prédica reformista no logró, sin embargo, contener la lucha armada; ella incluso se incrementaba con la aparición

del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru —admirador de las gestas guerrilleras de Cuba y Nicaragua— cuya membresía era sobre todo urbana y favorecía una amplia política de alianzas, principalmente con Sendero Luminoso. Pero este rechazó dicha estrategia y fuertemente criticó a quienes hubiesen colaborado con el MRTA, aunque solo hubiese sido de manera operativa.

En los comicios de 1990 Alberto Fujimori derrotó al candidato derechista, tras lo cual impuso un programa de austeridad contra la hiperinflación y ordenó el aumento de la lucha anti-subversiva. Pero como estos empeños para derrotar a los rebeldes no tuvieron las consecuencias deseadas, mediante un “autogolpe” el presidente disolvió el Congreso, impuso la censura de prensa, suspendió diversos artículos de la Constitución y declaró una guerra ilimitada a la insurgencia. Pronto el gobierno tuvo éxitos en esta esfera, pues hasta llegó a capturar a Abimael Guzmán. Luego, en noviembre de 1992, sus partidarios arrasaron en las elecciones legislativas. Y al final del siguiente año, un referéndum Constitucional aprobó un régimen muy presidencialista que permitía la reelección. Ella tuvo lugar en abril de 1995, tras las autoproclamadas victorias en las escaramuzas fronterizas con el Ecuador, que ensalzaron la aureola de éxitos de Fujimori. Esta llegó a su cima cuando tropas especiales liquidaron a los “tupacamaristas”, que hab'án ocupado la Embajada de Japón —en Lima— durante más de tres meses.

A partir de 1997, el fortalecido presidente acentuó su práctica neoliberal de privatizar y aplicar una “política de ajustes” orientada por el FMI, mientras restring' a derechos y libertades fundamentales con el pretexto de “liquidar el terrorismo”. Esas medidas provocaron un masivo disgusto, que se multiplicó al anunciar Fujimori su deseo de reelegirse. Pero en los comicios este no alcanzó el 50 % de los sufragios y su principal contrincante —Alejandro Toledo de la agrupación Perú Posible— se neg' a ir a la segunda vuelta, pues aleg' la existencia de un fraude. Único participante en la nueva ronda, el presidente se proclamó vencedor y provocó la ira generalizada. Para aplacarla, Fujimori convocó a nuevas elecciones y disolvió el repudiado Sistema de Inteligencia Nacional dirigido por Vladimiro Montesinos, muy desprestigiado por escándalos de soborno. Entonces muchos “fujimoristas” pasaron a la oposición que así controló el Congreso, lo cual auspició la salida del país del presidente, quién renunció al poder desde el Japón. En las elecciones de abril del 2001, Alejandro Toledo venció a Alan García y ocupó la primera magistratura el 28 de julio del propio año, con lo cual puso fin a una década de “fujimorismo”.

Concepciones de la unidad popular de Allende

En Chile, el triunfo de la Revolución Cubana se reflejó en la victoria electoral parlamentaria de 1961 del Frente de Acción Popular. Esta coalición de socialistas, comunistas y otras fuerzas de izquierda venció a la burguesía, dividida entre el viejo Partido Radical y la nueva Democracia Cristiana. Pero a los tres años aquella clase respaldó a este partido, que en lo fundamental esgrimía dos consignas: realizar —decía— una “revolución en libertad”, y acercarse aún más a los Estados Unidos gracias a la Alianza para el Progreso. Durante su sexenio presidencial, el presidente democristiano acometió una política reformista hacia el campo y las minas. Para aquel se diseñó una reforma agraria cuyo objetivo esencial era ampliar el mercado interno, pues nada se exportaba de dichas tierras y solo se pretendía crear una vasta capa de medianos propietarios; se expropiaron así dos millones quinientas mil hectáreas entregadas a veinte mil familias, o sea el 8 % de quienes podían aspirar a beneficiarse. Después se compró el 51 % de las acciones a las compañías mineras estadounidenses, mientras se dejaba en sus manos el control de lo que se producía y su comercialización.

La Unidad Popular era una poderosa coalición política —heredera del FRAP— que aliaba a comunistas, socialistas, radicales, recién escindidos de los democristianos, y otros grupos progresistas que auspiciaban la candidatura de Salvador Allende, quien se enfrentaba a la burguesía de nuevo dividida. El programa de la UP proponía el surgimiento de tres áreas de propiedad bien diferenciadas: la social, la mixta y la privada. En la primera se englobarían las empresas estatales así como todos los monopolios criollos o extranjeros que fuesen nacionalizados, además de las riquezas básicas y el comercio exterior, lo cual en total representaba el 50 % del PGB. El resto no sería tocado, aunque los sectores donde operaba la burguesía media serían considerados como “mixtos”, pues en ellos también podr’an funcionar entidades del Estado. En cambio, el “área privada” de la economía sería de la exclusiva competencia de los pequeños-burgueses y de los trabajadores por cuenta propia. El proyecto de la UP también contemplaba acelerar la reforma agraria, pero afectando sobre todo las grandes propiedades particulares, con el propósito de establecer sobre ellas formas cooperativas de producción, y a la vez reorganizar a los minifundistas y defender las comunidades indígenas mapuches.

Allende ocupó la presidencia el 4 de noviembre de 1970, tras lo cual expropió trescientos cincuenta grandes latifundios que abarcaban más de tres millones de hectáreas y nacionalizó todo el cobre, que obtenía tres cuartas partes de las divisas del país. Pero de inmediato Estados Unidos inició un bloqueo silencioso contra su gobierno, al que a penas le concedía créditos, a lo cual habría que añadir la reticencia del Congreso chileno dominado por la derecha, a aprobar la ley de las tres áreas de la economía. Después, aunque la clase obrera mantenía su firme apoyo al proceso de cambio, comenzaron las manifestaciones de la aristocracia y el terror oligarca, que engendraron un clima de incertidumbre. Ello fue aprovechado por unos apresurados generales para promover un golpe de Estado en junio de 1973, que fracasó. A pesar de ese intento, la UP dejó incólume los mandos y estructuras de las fuerzas armadas, lo cual brindó seguridad a la reacción que pasó a la ofensiva y obligó a renunciar al jefe constitucionalista del ejército. Una vez en su jefatura, el general Augusto Pinochet ordenó el ataque al palacio presidencial, donde Salvador Allende murió con un arma en las manos. Comenzaba el fascismo.

Nicaragua

En Nicaragua, el ajusticiamiento del tirano Anastasio Somoza reanimó a los partidarios de la lucha armada, pero no fue hasta la creación del Movimiento Sandinista por Carlos Fonseca Amador, que los revolucionarios de ese país lograron vincular sus tradiciones nacionales con los propósitos de arrastrar las masas para transformar la sociedad. Esos proyectos cobraron fuerzas después del terremoto de 1972, cuando la reconstrucción de la capital fue convertida en negocio particular de la dictadura nepotista, lo cual fue rechazado por el resto de la burguesía. Esta creó entonces la opositora Unión Democrática de Liberación, animada por el influyente Pedro Joaquín Chamorro —director del conservador diario La Prensa— quien se vinculó al Partido Socialista y a diversas agrupaciones sindicales en su empeño por desestabilizar al corrupto régimen. El problema de ellos era, que no sabían cómo triunfar, y en sus intentos Chamorro publicó en septiembre de 1977 todas las estafas y turbios manejos de la dictadura alrededor de la reconstrucción de Managua. Somoza no lo perdonó y el 10 de enero se le asesinó. Su sepelio se convirtió en masivo acto de repudio a la tiranía, en el cual de manera espontánea el pueblo

coreó las consignas del FSLN. Esto fue bien aprovechado por el recién creado Grupo de los Doce, para incorporar la oposición pasiva a la lucha activa; en la práctica dicha agrupación empezó a servir de enlace entre las tradicionales fuerzas opositoras y el sandinismo. Entonces pudo tener lugar una gran huelga política de protesta, a la vez que todos los anti-somocistas se aglutinaban en el Frente Amplio Opositor. Pero las impetuosas ofensivas armadas del FSLN demostraban quién era la verdadera vanguardia en los esfuerzos por derrocar al régimen. Después la Dirección Nacional Conjunta del sandinismo constituyó el Frente Patriótico Nacional, para brindar un espacio en la lucha a todos los enemigos de la tiranía, lo cual sentó las bases para convocar el 4 de junio de 1979 a la huelga política general, que paralizó al país. Cinco días más tarde estallaba en Managua la insurrección. Se había creado una situación revolucionaria en Nicaragua.

El 17 de junio se conformó el Gobierno Provisional de Reconstrucción Nacional, que proclamó cuatro principios: no alineamiento internacional; relaciones con todos los países del mundo; autodeterminación de las naciones; estatización de los bienes de Somoza, así como la banca, el comercio exterior, la minería y las tierras ociosas. Después, el 19 de julio de 1979 los sandinistas ocupaban la capital y en ella establecieron la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Esta dispuso el cumplimiento del programa antes anunciado, delineó una política tributaria que descontaba a los burgueses el cuarenta por ciento de sus ganancias, e impulsó la reforma agraria. Ella expropió el 31 % de todas las tierras del país, que habían sido de la familia Somoza y sus allegados, así como las abandonadas u ociosas, las cuales fueron distribuidas en parcelas, agrupadas en cooperativas o estatizadas. Con los intereses nacionalizados se constituyó el Área de Propiedad del Pueblo, que en 1982 aportaba ya el 40,8 % del Producto Interno Bruto. Así, a pesar de que el sector privado era mayoritario en la economía, el estatal se había convertido en una pieza clave de esta, pues regulaba la actividad productiva, la inversionista y la distribución. Además, el Estado revolucionario reorientaba el comercio exterior; decaía el intercambio con los Estados Unidos —que imponía un creciente bloqueo económico— mientras aumentaban los vínculos mercantiles con el resto de América Latina y con los países socialistas. Pero la mejoría económica experimentada por Nicaragua pronto se vio afectada por la agresividad imperialista; el presidente de Estados Unidos ordenó que la CIA minara puertos y saboteara industrias,

estableció bases de las fuerzas armadas norteamericanas en la vecina Honduras, engendró bandas mercenarias que incursionaban dentro del pequeño país asesinando gentes y asolando bienes, en un proceso incluso prohibido por el Congreso estadounidense, que al ser burlado por el ejecutivo dio lugar al escándalo llamado “Iran-Contras”.

El sandinismo, que defendía la patria y sus conquistas populares, a pesar de la guerra contrarrevolucionaria desatada por Estados Unidos, creyó pertinente convocar a los comicios desde antes prometidos, cuyo objetivo era elegir una Constituyente y el poder ejecutivo; en la República funcionaban once partidos políticos, que representaban desde liberales y conservadores hasta socialcristianos y el FSLN. Este obtuvo un arrollador triunfo en las urnas, lo cual inauguró en el país una estable vida constitucional, caracterizada por sucesivos cuatrienios presidenciales regularmente efectuados.

Alianza para el progreso y fascismo militar

En América Latina a mediados de la década del cincuenta, el desalojo del poder —por una u otra vía— de Vargas y Perón, evidenció que la burguesía nacional se desintegraba y desaparecía; había culminado la sustitución de importaciones en la industria ligera y la demanda solvente estaba ya satisfecha por las producciones nacionales. A la vez, los precios mundiales de las exportaciones latinoamericanas caían, y surgían amenazadores los antes desconocidos déficit comerciales. Entonces muchos pequeños y medianos propietarios quebraron, mientras los grandes se hacían más poderosos al centralizar las riquezas y concentrar la producción. Esto los impulsó a fundar compañías anónimas y a vincularse estrechamente con los bancos, debido a lo cual empezaron a controlar parte del mercado interno y a eliminar la libre competencia; comenzaban a surgir los monopolios criollos, algunas de los cuales entonces pensaron en la conveniencia de asociarse con las transnacionales, repletas de capital y tecnología.

Desde el triunfo de la Revolución Cubana, Estados Unidos se dedicó a buscar una alternativa burguesa para América Latina. Y el primer paso importante lo dio en septiembre de 1960, cuando en la Conferencia de Bogotá revirtió su tradicional postura como inversionista, y anunció su nueva política de colaboración entre el capital imperialista y las compañías criollas. Pero

fue al cabo de un año cuando dichos proyectos alcanzaron mayor envergadura, al proponer el gobierno del presidente John F. Kennedy durante la conferencia de Punta del Este la llamada Alianza para el Progreso; era un programa liberal reformista que tenía por objetivo modernizar el capitalismo latinoamericano mediante modificaciones en el agro, la educación, el fisco, la salud, y con un financiamiento gubernamental estadounidense ascendente a veinte mil millones de dólares. Entonces hacia América Latina comenzó a fluir el capital norteamericano auspiciado por la ALPRO, unido a otras formas novedosas como las “inversiones en cartera” y los créditos a las ventas. Esto provocó — que en 1974 solo el 36 % del total situado en nuestro sub-continente correspondiese ya a inversiones directas, lo cual condujo a Estados Unidos a emplear, cada vez más, a organizaciones financieras supranacionales dominadas por ellos, como el BID y el FMI, en sus empeños por mantener su control sobre nuestras economías. El éxito de las nuevas recetas indujo al gobierno estadounidense a cancelar oficialmente en ese año la Alianza para el Progreso.

A lo largo de la década del sesenta, en los países latinoamericanos donde existía, la oligarquía financiera criolla se empeñó que los gobiernos sirvieran en primer lugar a los monopolios privados, cada vez más anhelantes de asociarse con las poderosas empresas estatales, para instituir el capitalismo monopolista de Estado. Este proceso permitió que las instancias republicanas pertinentes —como en México— importasen capitales para ofrecerlos abundantes a los monopolios —del tipo que fuesen— de tal forma que en vez de endeudarse los consorcios lo hacía la nación. Este fácil acceso a las fuentes del capital y su vinculación privilegiada al progreso técnico, facilitó a las empresas de los oligarcas obtener sobre-beneficios, frente a los cuales las mediana y pequeña burguesías, solo tenían como futuro la pauperización. Pero en aquellas naciones de América Latina en las cuales la burguesía no monopolista —partidaria de un capitalismo autónomo e independiente, apoyado por el proletariado y otras fuerzas progresistas— parecía con posibilidades de afianzarse en el poder, las oligarquías financieras criollas se dispusieron a liquidar los tradicionales sistemas democrático-representativos, que dificultaban imponer el capitalismo monopolista de Estado. Por ello recurrieron a las cúpulas militares que dominaban las fuerzas armadas, con el propósito de que ocuparan el poder político y transformaran al tradicional Estado burgués; era necesario imponer un régimen tiránico, que modernizara el capitalismo en función de la hegemonía

monopolista, para lo cual esos gobiernos castrenses de nuevo tipo debían inmiscuirse en todas las esferas de la vida pública, social y política, al tiempo que intensificaran la tasa de acumulación de capital por medio de una drástica reducción del salario real y del incremento de la intensidad del trabajo al proletariado. Tras los respectivos golpes de Estado en Argentina, Brasil, Uruguay, así como del contrarrevolucionario de Pinochet en Chile, los militares-fascistas suprimieron los derechos, garantías y libertades democráticos; destruyeron las organizaciones populares; prohibieron los partidos políticos y los sindicatos obreros, los cuales fueron sustituidos por organizaciones verticalmente controladas por los gobiernos. Al mismo tiempo se eliminó la independencia de los poderes del Estado, la autonomía de las instancias locales, y se afianzó la supremacía absoluta del ejecutivo. De esta manera se instalaron nuevos equipos gubernamentales, formados por las cúspides militares, que utilizaron a la alta oficialidad como sustituta de las inexistentes formaciones partidarias fascistas. Aquella se entrelazó en la administración pública y en las empresas estatales con los jefes de la burocracia civil, que a su vez ocuparon importantes cargos en las compañías monopolistas. Se forjó así un sólido mecanismo unificador de las fuerzas oligárquicas y el ejército; se supeditó el aparato estatal y sus empresas a la burguesía financiera, mediante la unión personal. Estos regímenes fascistas-militares, además de sus habituales rasgos represivos, ayudaron a implantar el capitalismo monopolista de Estado en asociación con las transnacionales; con demerito promovieron un fuerte y acelerado endeudamiento público externo, acompañado de una política destinada a atraer grandes inversiones foráneas.

El ocaso del fascismo

La debacle militar de las fuerzas armadas argentinas en la improvisada aventura de las Malvinas a mediados de 1982, aceleró el deterioro del represivo régimen fascista, ya puesto en jaque desde antes por las movilizaciones populares de protesta. El gobierno castrense finalmente tuvo que brindar una salida electoral a la sociedad, tras lo cual las nuevas autoridades civiles enjuiciaron y enviaron a la cárcel a los principales oficiales previamente detentores del poder —generales y almirantes— así como a los más connotados torturadores y esbirros.

Uruguay

En Uruguay, aún sin un componente de guerra internacional, los militares-fascistas que regían la república también fueron siendo arrinconados por las crecientes manifestaciones opositoras, cuya magnitud fue tal que debieron ser autorizadas para no caer las autoridades en ridículo. Hasta que fueron convocadas elecciones generales, debido a las cuales el candidato de un partido tradicional ocupó la presidencia. Pero ante él estaba ya como gran fuerza opositora unificada al Frente Amplio, especie de convergencia democrática progresista que esgrimía novedosos proyectos transformadores.

Chile

En Chile las masas regresaron a la palestra pública en 1983, al celebrar la Primera Jornada Nacional de Protesta convocada por un Comando Nacional de Trabajadores, que al año cedió la plaza al Comando Unido de Movilización Social bajo cuya égida se aglutinó toda oposición, en un creciente proceso antidictatorial que incluso indujo a la Iglesia Católica a distanciarse de Pinochet. Este comprendió entonces que la situación podía irsele de las manos, por lo cual inició una apertura limitada que excluía a quienes incentivaran la lucha de clases, pero diseñaba un retorno a mecanismos representativos. Se acometió así un diálogo con la opositora Concertación de Partidos por la Democracia, al frente de la cual se encontraba el democristiano Patricio Aylwin. Tras las negociaciones se reformó la Constitución “pinochetista” para metamorfosear sus rasgos más odiosos, que sin embargo dejaba incólume bajo el control de los adictos al tirano entidades como el Consejo Nacional de Seguridad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, los directorios autónomos de la Banca Central y la Corporación del Cobre. A la vez se anunció que Pinochet seguiría al frente de las fuerzas armadas por ocho años más. Culminadas las adecuaciones, se convocaron a elecciones generales ganadas por la CPPD con Aylwin como candidato, quien ocupó la presidencia a principios de 1990.

De esa forma los militares regresaron a los cuarteles, sin desmoralizarse, dando su apoyo a instituciones que ellos habían engendrado, y que representaban la médula de una “democracia supervisada”.

En Brasil desde mediados de la década del setenta se incrementó el movimiento a favor de una apertura democrática, amnistía para los presos, y convocatoria a una Constituyente. Los estudiantes y los obispos católicos impulsaron dichas reivindicaciones, pero nada pudo compararse con los efectos de la reanimación de las luchas proletarias, que dirigidas por los metalúrgicos —entre las cuales sobresalía Luiz Ignacio Lula da Silva— realizaron una gigantesca huelga iniciada el primero de mayo de 1978. El gobierno tuvo que ceder: concedió significativos aumentos salariales, suprimió el uso de las “Actas Institucionales”, reestableció el Habeas Corpus, devolvió su independencia al poder judicial, suprimió la censura de prensa, y autorizó un Primer Congreso Nacional por la Amnistía. Este ascenso democratizador coincidió con el estancamiento económico, el auge de la inflación, la caída de las reservas monetarias nacionales, el déficit de la balanza de pagos, la creciente deuda externa que rondaba ya los cien mil millones de dólares, y la ley que permitía desnacionalizar las industrias estatales. Al legalizarse todos los partidos se organizó el Trabalhista, formado por gentes de pensamiento avanzado y líderes sindicales encabezados por Lula, que se estructuraron mediante movilizaciones populares en toda la nación. Este fervoroso respaldo le permitió al PT tener una fuerte presencia en la Asamblea Constituyente de 1987, que instituyó un régimen presidencialista y convocó a elecciones generales en noviembre de 1989. En ellos los tres principales candidatos fueron Fernando Collor de Mello, Leonel Brizola y Luiz Ignacio de Silva. El primero ganó los comicios e inauguró otra era de gobiernos civiles en el Brasil, de acuerdo con la nueva Constitución.

Estructuralismo y neoliberalismo

El pensamiento económico también refleja los problemas sociales multidimensionales y así mismo concierne a la cultura y a la política. Por eso el nacionalismo populista impulsó la industrialización para sustituir importaciones, lo cual incentivaría el mercado interno y permitiría redistribuir el ingreso entre los diversos componentes de la sociedad, gracias a originales ideas que desembocaron en el estructuralismo. Este conllevaba una comunidad de enfoque con el marxismo, pues reconocía la imposibilidad de alcanzar un desarrollo

sin realizar profundos cambios en la organización productiva. Dicha teoría, sin embargo, aunque situaba al desarrollo en estrecha vinculación con el funcionamiento del sistema capitalista mundial, denunciaba el falso universalismo de la ciencia económica y contemplaba factores sociales, no indagaba en las relaciones que se manifiestan en las formas de propiedad.

Al desplomarse los precios de las exportaciones latinoamericanas, la gran burguesía industrial de la región buscó una alianza con el capital extranjero. Para ello empleó el modelo desarrollista, que promovía la utilización de tecnologías e inversiones foráneas y reclamaba transformaciones estructurales así como la integración latinoamericana sin disminuir la participación estatal en la economía.

En la consecución de sus propósitos el desarrollismo enfrentó altos niveles de inflación así como gran escasez de divisas y frecuentes crisis en la balanza de pagos. Esto facilitó su crítica por los adeptos al “nuevo liberalismo”, que propugnaban el retorno a un Estado indiferente ante diversos elementos de la sociedad, con el propósito de que brotase “el orden económico natural y espontáneo”. Así se retornaría a la supremacía ilimitada del mercado, y se devolvería la “racionalidad al sistema”, afectada —decían— por el intrusismo gubernamental que obstaculizaba el libre juego de la oferta y la demanda en distintas esferas. Propugnaban, por lo tanto: privatizar las empresas estatales, eliminar los déficit públicos, alcanzar la estabilidad monetaria, lograr una competitividad internacional mediante una apertura productiva, comercial y financiera.

La aplicación de los preceptos neoliberales en América Latina comenzó por Chile después del golpe de Estado de Pinochet. Le siguieron luego Uruguay y Argentina, tras las sucesivas implantación también en ellos de regímenes militares-fascistas, que todo lo reestructuraron: producción, finanzas, comercio, comunicaciones, cultura, política, vida social, relaciones internacionales. Esos procesos reforzaron —interna y externamente— la subordinación de los débiles con respecto a los poderosos, en vez de engendrar entre estos y aquellos la cacareada interdependencia; la globalización neoliberal daba un “trato igual” a todos, no obstante las grandes diferencias entre unos y otros, lo cual acicateó la creciente divergencia entre el pequeño polo de los riquísimos y el enorme de los pobres y pauperizados.

A partir de la Alianza para el Progreso, las gobernantes oligarquías latinoamericanas endeudaron a sus países de forma increíble con los imperialistas,

que por su parte impulsaban una política prestamista de “crédito barato” debido a la progresiva “bancarización” de su propia economía. Pero al ocupar Ronald Reagan la presidencia de los Estados Unidos, el flujo de capitales norteamericanos hacia el exterior se detuvo; su gobierno sobrevaloró el dólar gracias a altísimas tasas de interés, con el propósito de revertir la tendencia deficitaria en la balanza de pagos estadounidense. Desde entonces cambió el comportamiento de la deuda externa latinoamericana, que había sido concertada a justiprecios flotantes y más bien bajos; de esa forma América Latina, y solo por concepto de saldar los réditos, se convirtió en exportadora neta de capitales sin que disminuyesen sus crecientes adeudos, pues debía pedir a sus acreedores nuevos montos exclusivamente para abonar los intereses de lo que debía. Entonces los neoliberales diseñaron políticas de ajuste así como de estabilización fiscal y monetaria, con el propósito de permitir el flujo hacia el exterior de recursos para el servicio de la deuda, lo cual ocasionó resultados recesivos. Por ello se decidió saldar cualquier déficit fiscal o externo: mediante la venta o privatización de las propiedades del Estado, por la merma de la demanda interna —lo cual deterioró— el nivel de vida de la mayor parte de la población— al detener cualquier inversión que animase el crecimiento de la economía.

La globalizada reestructuración neoliberal en América Latina fortaleció la presencia de las empresas transnacionales, como consecuencia de la venta de propiedades estatales a inversionistas foráneos. Pero luego de la crisis financiera mexicana en 1994 se provocó gran inestabilidad en los sistemas financieros de la región, como reflejo de los desequilibrios de la economía mundial y de la volatilidad de los “capitales golondrinas”. Hasta que el segundo ataque especulativo contra el real brasileño (enero de 1999) desató en las repúblicas latinoamericanas la crisis en su forma más aguda.

Argentina

A finales de los años ochenta, en Argentina la inflación era de cuatro dígitos y la economía disminuía. Entonces el presidente Carlos Saúl Menem ató la moneda nacional a la estadounidense y dispuso que aquella estuviese garantizada en un 80 % con valores foráneos. Este “plan de convertibilidad” que establecía la paridad peso-dólar, de inmediato recibió gran apoyo desde

el extranjero, cuyos capitales comenzaron a llegar al país e iniciaron la reanimación de la economía. Pero desde 1994 el sobre-valorado billete austral comenzó a perjudicar la competitividad de las producciones argentinas, a lo cual se añadieron las consecuencias del llamado “efecto tequila”, que detuvieron la llegada de nuevos capitales. Entonces el gobierno de Ménem comenzó a emplear sus reservas para sufragar los déficits de la economía, que se estancaba; la percepción de impuestos disminuía, los baratos productos importados frenaban las encarecidas producciones autóctonas, se multiplicaron las quiebras de negocios —sobre todo pequeños y medianos— creció el desempleo. Para enfrentar la catástrofe Ménem orientó privatizar las empresas estatales, pero las vendió a consorcios internacionales que luego las hicieron funcionar en exclusivo beneficio de sus intereses monopolistas, lo cual perjudicó mucho a la población sobre todo en lo relacionado con los antiguos servicios públicos de agua, electricidad, teléfonos y transportes. La situación se tornó gravísima al acercarse el monto de la ascendente deuda gubernamental a la mitad del PNB, y el Brasil permitió que flotase el real. De golpe los productos argentinos se hicieron carísimos en el mercado de su principal socio comercial, con lo cual una parte considerable de las inversiones foráneas en Argentina se reorientaron para establecerse en tierras del gigantesco vecino.

La difícilísima situación socioeconómica ocasionó crecientes fisuras dentro del Partido Peronista, que se representaban en la contraposición del gobernador de la provincia de Buenos Aires —Eduardo Duhalde— con el presidente de la República. De esa forma la alianza del Partido Radical con el Frente de un País Solidario (FREPASO) triunfó sobre el desgarrado justicialismo en las elecciones de octubre de 1999. El vencedor, sin embargo, no se apartó del neoliberalismo y anunció nuevas medidas de austeridad así como alteraciones al Código Laboral en perjuicio de los trabajadores. Hasta que a mediados de 2001 se evidenció que el país marchaba hacia un precipicio pues la fuga de capitales resultaba indetenible. Y en diciembre, ante el rechazo del FMI a una solicitud de ayuda realizada por el gabinete de Fernando de la Rúa, la Argentina anunció que no podría pagar sus compromisos sobre los intereses de la deuda externa. Los depositarios se precipitaron entonces a los bancos, y en respuesta el gobierno estableció un “corralito” al congelar todos los activos. La población, exasperada, se lanzó a las calles pues no aguantaba más, y el presidente tuvo que renunciar. El país vivía la peor crisis de su historia luego de haber cumplido con fidelidad los postulados del neoliberalismo. El modelo había fracasado!

Integración Latinoamericana

La idea de una América Latina integrada fue originalmente concebida por Francisco de Miranda, pero hasta que Simón Bolívar ocupó la presidencia de Venezuela dicho proyecto no pudo ser acometido; comenzó por la unión de neogranadinos y venezolanos, seguida de la etapa confederativa entre la Colombia bolivariana y el Perú de San Martín. Después el Chile de O'Higgins y México se sumaron al empeño, que debería culminar en una Liga Perpetua de los Estados mediante la convocatoria a un Congreso Anfictiónico de Diputados a la Confederación. Este se celebró a mediados de 1826 en Panamá, y dejó listo el texto a ratificar por las instancias pertinentes en cada república. Pero ello nunca tuvo lugar, pues la ofensiva conservadora desplazó del poder a los revolucionarios, y deshizo los esfuerzos integradores.

El presidente peruano Ramón Castilla en 1848 convocó a un movimiento solidario contra toda intentona recolonizadora, en el cual además participaron Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia, aunque al final este último país no lo ratificó. Más tarde, al tener lugar las acciones filibusteras estadounidenses dirigidas por William Walker contra Nicaragua, Castilla encabezó el irrestricto apoyo brindado a los centroamericanos hasta el fusilamiento del aventurero en 1860. Este éxito condujo a la redacción de un Tratado de Alianza y Confederación entre Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia, Costa Rica y Perú al cual México fue invitado a asociarse ante la amenaza de agresión tripartita anunciada en Londres a principios de 1861. Lamentablemente, aunque el gobierno de Juárez se incorporó al acuerdo, los demás Estados no lo ratificaron.

José Martí, Eloy Alfaro, Sandino y algunos otros connotados revolucionarios, con posterioridad también concibieron propósitos unitarios para América Latina, pero no tuvieron la posibilidad de plasmarlos en efectivos acuerdos que impulsaran el referido proceso de integración.

A mediados del siglo XX, saturada la demanda solvente en los Estados latinoamericanos gobernados por la tendencia del nacionalismo populista, dichos regímenes promovieron tratados de unión económica con los países vecinos para ampliar sus mercados de venta. Sobre todo Argentina firmó—varios—con Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay— y después ideó un acercamiento político-económico con Brasil y Chile bajo la denominación de pacto ABC. Pero todo se frustró con el suicidio de Vargas y el derrocamiento de Perón.

Juscelino Kubitschek, presidente del Brasil, retomó con criterios desarrollistas los proyectos de integración latinoamericana, por lo cual en 1958 propuso a Estados Unidos que apoyase esos empeños con capitales y tecnología. Su solicitud, sin embargo, no recibió la menor atención.

Desde el triunfo de la Revolución en 1959, Fidel Castro llamó a realizar la unión económica, primero, y política después, de América Latina. Entonces Estados Unidos cambió su postura y apoyó la propuesta de integración latinoamericana, a condición de que de ella se excluyera a Cuba. Surgió así la ALALC, que representaba la posibilidad más primaria de cuantas existían, pues solo se planteaba terminar con el bilateralismo mercantil e iniciar paulatinamente después el tránsito hacia nuevos objetivos. Tras ponerse en vigor el tratado, el comercio intrazonal casi se duplicó y llegó a representar el 13 % del total intercambiado. Pero luego de 1965 el porcentaje no creció más. Al mismo tiempo los beneficios fueron muy desiguales; la participación de Argentina, Brasil y México en el tráfico mercantil de la zona creció mucho, mientras los menos industrializados acumulaban notables déficits comerciales. Las transnacionales asociadas con monopolios criollos, sin embargo, fueron las que mejor aprovecharon las mayores economías de escala.

Los perjuicios sufridos por la débil burguesía industrial de los países de menor desarrollo relativo, no protegida en forma alguna de la penetración de capitales extranjeros y los reiterados saldos negativos en su intercambio con los Estados más industrializados de la región, provocaron el rechazo de Bolivia, Perú, Chile, Ecuador y Colombia, que en mayo de 1969 —dentro de la ALALC— firmaron el Acuerdo de Cartagena, el cual originaba el Pacto Andino. Este contempló la creación de programas conjuntos e incluso el surgimiento de empresas multinacionales. El tratado permitió—que este comercio “intrazonal” se multiplicara por seis en un quinquenio, el surgimiento de un banco financiero multinacional llamado Corporación Andina de Fomento y la toma de la Decisión 24.

Esta regulaba la inversión extranjera al establecer quince años para que las compañías foráneas se transformaran en nacionales o mixtas, y prohibía nuevos capitales provenientes del exterior en sectores claves de la economía. Venezuela se adhirió al pacto en febrero de 1973, pero algo más tarde Chile fue excluido del mismo por haber emitido el gobierno de Pinochet el Decreto-ley 600, contrario a las limitaciones financieras planteadas en la mencionada vigésimo cuarta Decisión.

En diciembre de 1960 el Tratado de Managua agrupó a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con el propósito de establecer en cinco años un mercado común que no excluyera a los capitales foráneos, dada la poca importancia que en el área tenía la burguesía industrial. A la vez se creó un Banco Centroamericano de Integración Económica, el cual funcionaba en un 86 % con créditos extranjeros. En once años el comercio intrazonal se multiplicó por ocho y la unificación arancelaria alcanzó un 95 % del tráfico mercantil con tarifa común, aunque no incluía las exportaciones tradicionales de café, algodón, azúcar, alcoholes y bananos. Además, el saldo deficitario de la balanza comercial colectiva se incrementó en tres veces y medio, sobre todo en provecho de Estados Unidos.

Tras la independencia del Caribe anglófono surgió el primer esfuerzo de integración económica autóctona en esta área, cuando en mayo de 1968 Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad Tobago y siete territorios bajo régimen autónómico formaron la Asociación de Libre Comercio del Caribe. Dentro del conjunto se creó un subgrupo formado por las islas de Sotavento y Barlovento, al que se otorgaba el doble de tiempo para eliminar sus aranceles. Además se constituyó el Banco Caribeño de Desarrollo para financiar el progreso industrial. A partir de entonces la tasa de crecimiento del comercio intrazonal se triplicó, hasta que a principios de 1973 se logró implantar un arancel aduanero único y una política comercial exterior común, lo cual permitió que se procediera al objetivo superior de establecer la Comunidad del Caribe.

En 1975 surgió el Sistema Económico Latinoamericano, que incluía a Cuba y a los países caribeños anglófonos, pero del cual se excluyó a Estados Unidos. El SELA se proponía auspiciar la formación de empresas multinacionales latinoamericanas, estimular la autosuficiencia alimentaria, impulsar la transformación de las materias primas en productos elaborados, defender los precios de las exportaciones criollas tradicionales.

Luego de la derrota de las dictaduras militares fascistas en Brasil y Argentina, sus gobiernos civiles firmaron en 1985 el Acta de Foz de Iguazú que en diez años debía conducir al surgimiento de un mercado común con políticas comerciales armonizadas. En 1991 el nuevo régimen del Uruguay se sumó al pacto, así como el de Paraguay, debido a lo cual se constituyó el Mercado Común del Sur, cuyo período de transición debía culminar a finales de 1994. El MERCOSUR se caracterizó por la simultánea y gradual

apertura arancelaria, lo que permitió que en poco tiempo el noventa por ciento de las mercancías estuviesen en libre comercio. Y en 1995 entró en vigor el Arancel Externo Común como el principal instrumento de política comercial del área en su primera etapa. Asimismo en su interior se dinamizaron los flujos de capital y creció la inversión extranjera, aunque subsisten grandes diferencias en las regulaciones nacionales sobre finanzas, seguros, transporte aéreos y algunos sectores más, en especial el de asuntos laborales. Poco después Chile y Bolivia firmaron acuerdos de asociación con el importante empeño integracionista sudamericano, cuyo principal socio comercial es la Unión Europea.

Dentro del ámbito de la integración de América Latina, en 1991 surgió el fenómeno político de las Cumbres Iberoamericanas, en las cuales participaron España y Portugal pero de las que se excluyó a Estados Unidos. Se decidió celebrarlas anualmente, con un tema específico y diferente cada vez, a partir del criterio de que la cooperación estaba fundamentada en el irrestricto respeto a la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación y la independencia de todos los países, por lo que se estimaba que cualquier nación latinoamericana podía seleccionar por sí misma los medios, mecanismos e instrumentos de gobernación que estimara pertinente.

La Asociación de Estados del Caribe se constituyó el 24 de julio de 1994 por veinticinco heterogéneos países de la región, pertenecientes en su mayoría a diferentes esquemas de integración, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México), el Mercado Común Centroamericano, el CARICOM y el Pacto Andino (Colombia y Venezuela). Solo Cuba, República Dominicana, Haití y Surinam hasta entonces no pertenecían a alguno. Holanda, Francia y Gran Bretaña autorizaron a sus dependencias a participar de la AEC, a diferencias de los Estados Unidos que lo prohibieron a Puerto Rico e Islas Vírgenes. En realidad, la Asociación se ha proyectado más como un espacio de cooperación que de integración, y en sus empeños sobresalía la decisión de promover una estrategia que impulsara al área como Zona de Turismo Sostenible, lo cual podría estimular avances en los transportes aéreos y marítimos que redundarían en la ampliación de los flujos comerciales de la región.

La revolución Bolivariana

En Venezuela el fin de la lucha armada engendró el desconcierto entre los revolucionarios, que mucho polemizaron entonces entre sí hasta el punto de que algunas tendencias se escindieron de las organizaciones a las cuales hasta ese momento pertenecieran. Sucedió así, por ejemplo, con los comunistas, parte de los cuales abandonó el partido. Los primeros en separarse fundaron el Movimiento al Socialismo, que se presentaba —decía— como una alternativa al capitalismo explotador y al socialismo autoritario y burocrático. Más tarde, otros que hab'án pertenecido al PCV crearon “La Causa Radical”, cuyos adeptos con frecuencia mantuvieron posturas más militantes que muchos de los afiliados al “Masismo”. Todos, sin embargo, tenían que enfrentarse al sistema burgués desarrollista instituido por el Pacto de Punto Fijo, el cual estructuró un llamada democracia bipartidista animada por las organizaciones AD y COPEI. Este régimen se benefició del torrente de petrodólares originado por el auge de los precios del crudo negro en el mercado mundial, lo cual facilitó una política de conciliación de clases que a la vez fortaleció a la pequeña y mediana burguesías. Pero el desplome de las cotizaciones del oleoso líquido condujo al Viernes Negro de 1983, cuando se tuvo que maxi-devaluar la moneda nacional y eso conllevó a una drástica disminución de la demanda solvente en el mercado interno. Poco después Carlos Andrés Pérez regresó (1989) a la presidencia a pesar de que había abrazado un programa neoliberal de ajuste estructural. Esa política desembocó en el estallido social conocido como el “Caracazo”, el cual involucr—al ejercito en una represión que al menos ocasionó quinientos muertos. Ante esa barbarie, en las fuerzas armadas resurgieron las inquietudes políticas, como la de Hugo Chávez, quien organizó el Movimiento Bolivariano Revolucionario, el cual intentó realzar un golpe de Estado en febrero de 1992. No obstante su fracaso, otros militares —sin vínculos con el MBR— se empeñaron en repetir la gesta, y corrieron la misma suerte.

El desprestigio del régimen condujo al Congreso a deponer al presidente a mediados de 1993, y al Tribunal Supremo a enjuiciar poco después a un predecesor de aquel, por irregularidades durante el ejercicio de sus funciones. El sistema bipartidista recibió otra estocada cuando Rafael Caldera, uno de sus fundadores y expresidente, abandonó el COPEI y criticó incisivamente al “puntofijismo” para regresar a la primera magistratura con una organizaci—

política nueva. Pero aunque al principio Caldera trató de distanciarse de las viejas prácticas, al final sucumbió ante el neoliberalismo. Fue entonces cuando se proyectó con fuerza la figura de Hugo Chávez, quien se nutrió del MBR y de civiles revolucionarios para conformar su Movimiento por la Quinta República; este llamaba a una Asamblea Constituyente para enrumbar al país por otros cauces. Después con el MVR, el Partido Patria Para Todos —una escisión de avanzada de La Causa Radical—, el PCV y ex “Masistas”, Chávez forjó el Polo Patriótico con el cual ganó las elecciones de diciembre de 1998. Y luego de ocupar la presidencia disolvió el Congreso y convocó a la prometida Constituyente, cuyo proyecto de Carta Magna fue abrumadoramente aprobado en un referéndum. Surgió así la República Bolivariana de Venezuela, que reforzaba el poder ejecutivo y el estatal a la vez que diseñaba una sociedad democrática, justiciera y participativa. Tras ser reelecto, Chávez obtuvo del nuevo Congreso unicameral una Ley de Habilitación que lo autorizaba a gobernar en la esfera socioeconómica mediante decretos durante un año. Entonces emitió cuarenta y nueve disposiciones trascendentales, entre las que sobresalían la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario —que permitía expropiar latifundios— así como la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual fijaba en 51 % la participación estatal y gravaba las utilidades extranjeras con un impuesto del 30 %.

El sector empresarial de inmediato desencadenó fuertes protestas públicas, que desembocaron en un paro nacional de doce horas el 10 de diciembre de 2001. Después de semanas de fuertes luchas callejeras, la Confederación de Trabajadores —opositora y dominada por la aristocracia obrera afiliada al partido ADECO— convocó a un cese laboral indefinido el 9 de abril con el objetivo de derribar al gobierno. En ese contexto, a los dos días el jefe de las fuerzas armadas anunció falsamente que Chávez había renunciado, y añadió que el presidente de la asociación empresarial FEDECAMARAS había ocupado su cargo. Pero a las cuarenta y ocho horas el pueblo se lanzó a las calles y junto con los militares institucionalistas devolvieron a Chávez al palacio Miraflores. Entonces la oposición preferenció golpear la economía para alcanzar sus retrógrados empeños, y a principios de diciembre propició la paralización creciente de la industria petrolera. Sin embargo, la decisiva respuesta de las fuerzas armadas y el fundamental respaldo de asalariados, humildades y desposeídos, gradualmente venció los propósitos fascistas. Hasta que a principios de 2003 la normalidad regresó al país, cuyo proceso revolucionario bolivariano emergió fortalecido de la confrontación.

En Brasil, el conservador Fernando Collor de Mello ocupó la presidencia en 1990 con un drástico programa anti-inflacionario, que terminó en una profunda recesión. Esto y la corrupción generalizada de su gobierno provocó que fuera enjuiciado por el Congreso, debido a lo cual dimitió a la primera magistratura. Su vice-presidente ocupó entonces el cargo con el objetivo de dar un espacio en su gabinete a otras fuerzas, por ello entregó la cartera de Hacienda al socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, quien debía reestructurar la enorme deuda externa brasileña. En este empeño tuvo relativo éxito, lo cual le facilitó aspirar a la presidencia en 1994 al frente de una coalición de su partido con el Frente Liberal y el llamado Movimiento Democrático, con la que triunfó. El principal logro de Cardoso durante su primer cuatrienio fue reducir la inflación mensual del 50 % al 1,5 %. Para el segundo ofreció — al igual que Lula, su principal contrincante en las elecciones presidenciales — reformas económicas de gran envergadura así como una mayor justicia social. Pero Cardoso no pudo cumplir sus promesas, por lo cual sectores empresariales perjudicados por las altas tasas de interés bancario, la transnacionalización de la economía y la privatización de empresas, se inclinaron hacia una alianza con el Partido Trabalhista como única forma de sobrevivir ante la creciente monopolización globalizada que los agobiaba. Se evidenciaba que, sin mayores fuerzas, estos sectores necesitaban entenderse con los asalariados para deshacer el modelo neoliberal. Por su parte los proletarios, carentes aún del poderío susceptible de establecer su indiscutida hegemonía en la República, requirieron hacer concesiones a los empresarios medianos para avanzar con un proyecto populista revolucionario que le permitiese adelantar en su camino hacia el socialismo. Por eso la campaña electoral de Lula se basó en respetar durante un año la ortodoxia macroeconómica, devolver al Estado funciones esenciales, impulsar la reforma agraria, mejorar los peores aspectos sociales que sufrían los humildes y desposeídos. Se forjó así una fortísima corriente política, dirigida por un poderoso y experimentado partido, cuya campaña logró que en las elecciones de octubre de 2002 se alcanzara una extraordinaria victoria popular. Por ello el siguiente primero de enero, Luis Ignacio da Silva ocupó la presidencia del Brasil. ¡Una era nueva comenzaba!

En Cuba, la crisis engendrada por la desaparición de los regímenes socialistas europeos y la desintegración de Unión Soviética condujo a partir de 1990 a una situación difícilísima, agravada por el recrudecimiento del bloqueo

estadounidense con leyes extraterritoriales. Entonces en el país se reconoció la existencia objetiva de la Ley del Valor aún en el socialismo, y el gobierno revolucionario adoptó un Programa de Emergencia Economía —denominado Período Especial. El propósito de este era, atenuar las afectaciones a la población, reducir los gastos presupuestarios y priorizar lo que en mayor medida contribuyese a superar las dificultades, hasta poder retomar el proceso de desarrollo. En ese ámbito, la principal medida estructural fue crear las Unidades Básicas de Producción Cooperativa agrícolas, que transformaron las formas de gestionar la propiedad; no cambiaba la posesión estatal, pero el usufructo de las tierras fue cedido permanentemente a los colectivos de trabajadores, que desde entonces se agruparon en pequeñas empresas autogestionadas. A la vez, en 1994 se crearon los mercados agropecuarios a los que podían acudir las diferentes formas de propiedad, lo cual permitió que en solo doce meses los precios de venta cayeran un 50 %, al crecer de manera impresionante las cosechas. Después se reactivó el trabajo por cuenta propia en esferas de la producción mecánica y los servicios, así como se legalizó la tenencia de dólares a la población. A la vez se aprobó la Ley de Inversión Extranjera, que permitía a capitales foráneos —de forma regulada— establecerse en el país, sobre todo con vistas a producir para el mercado internacional. Luego se reestructuró la banca, se introdujo un nuevo sistema tributario, y se redujeron paulatinamente los subsidios a las empresas estatales. Estas fueron asumiendo un nivel de gestión mucho más independiente, que debe culminar con su total autofinanciamiento. A la par se acometió la descentralización del monopolio estatal del comercio exterior. Por último se decidió cerrar la mitad menos eficiente de los centrales azucareros, y se entregó la función de motor de la economía al sector turístico, en vertiginoso ascenso.

El conjunto de medidas adoptadas provocó la recuperación anhelada, pero al mismo tiempo afectó los niveles de equidad alcanzados por la sociedad antes de la crisis. En esta República, sin embargo, se persevera en construir un socialismo muy humanista, con impresionante acceso de las masas a una buena salud, y a una eficiente educación que se refleja en una elevada cultura, entendida esta no solo como acumulación de conocimientos, sino sobre todo como un nuevo modo de pensar de los cubanos. En este se conjugan asombrosa dignidad, gran audacia, mucha inteligencia y enorme apego a la realidad. Esos rasgos y la calidad de vida alcanzada por dicha población durante el proceso revolucionario, son la prueba fehaciente de que mediante la lucha es posible lograr un mundo mejor.

América Latina, en contraste, durante el 2002 experimentó en su Producto Interno Bruto resultados negativos (-1,9%) por segundo año consecutivo. En los referidos últimos doce meses, la región además transfirió al exterior 39 000 millones de dólares netos mientras la deuda externa ascendía a la descomunal cifra de 725 000 millones de dólares, y el pago de sus intereses absorbía buena parte de los recursos susceptibles de ser orientados al desarrollo. Esto provocó en el sub-continente que se multiplicaran flagelos como la pobreza, el desempleo, la malnutrición y la insalubridad. Pero en la misma medida se incrementaba la lucha de los pueblos por llevar a los gobiernos fuerzas verdaderamente patrióticas o progresistas y revolucionarias, dedicadas a lograr el mejoramiento de las repúblicas latinoamericanas y su integración.

Por eso en Buenos Aires, al asistir a la investidura presidencial de Néstor Kirchner —candidato peronista de avanzada que había derrotado en los recientes comicios generales del país a Carlos Saúl Menem, quien pretendía retornar a la primera magistratura con el respaldo de la corrupta derecha “justicialista”— Fidel Castro pudo expresar, el 28 de mayo del 2003:

Vemos en América Latina un movimiento de avance que se produce. Si me preguntara alguien por qué sentí gran satisfacción y júbilo cuando llegaron las noticias de un resultado electoral en nuestra queridísima Argentina, fijense, hay una razón muy grande: Lo peor del capitalismo salvaje, como diría Chávez; lo peor de la globalización neoliberal es que el símbolo por excelencia (...) ha recibido un colosal golpe.*

La alternativa Bolibariana para las Américas (ALBA)

Muy poco tiempo después de la referida toma de posesión, los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Néstor Kirchner dieron a conocer el denominado Consenso de Buenos Aires. En él exhortaban a los países latinoamericanos a oponerse a las concepciones neoliberales impulsadas desde Washington, y proponían un tipo de sociedad dedicada a luchar contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el analfabetismo. El documento afirmaba que no se puede pagar

* Fidel Castro: *Granma*. Mayo, 29, 2003, p. 4.

la enorme deuda externa de la región con hambre y exclusión social, ni tampoco con abusivos programas de ajustes financieros tales que los propugnados por el FMI, al mismo tiempo reclamaba el fortalecimiento del papel del Estado, el crecimiento económico sostenido con una distribución equitativa de las riquezas, así como con disposiciones tributarias o fiscales más justas.

A la vez dicho llamado se pronunciaba contra las amenazas hegemónicas a la paz y respaldaba el papel central de la ONU en los asuntos mundiales, mientras insistía en que resultaba imprescindible para América Latina alcanzar su integración.

Acorde con ese postulado, al año, en el 180 aniversario de la Batalla de Ayacucho y de la convocatoria al Congreso Aficcionario de Panamá, en el Cuzco, se reunieron las máximas autoridades de los doce Estados independientes de América del Sur, para instituir la Comunidad Sudamericana de Naciones. El propósito era fundir los países del Pacto Andino con los del MERCOSUR —a los que se añadirían aquellos no incorporados a ninguno de ambos proyectos— con el objetivo de formar un conglomerado que supera los diecisiete millones de kilómetros cuadrados —el mayor del mundo— con un Producto Interno Bruto cercano al billón de dólares; cantidades prácticamente ilimitadas de todo tipo de minerales sólidos, así como de gas y petróleo; cuyas exportaciones anuales rondan los doscientos mil millones de dólares. Y a la semana, en Cuba, los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro, ampliaban de manera considerable el Convenio Integral de Cooperación entre ambas repúblicas. Era una expresión concreta del espíritu de la Declaración Conjunta suscrita poco antes entre las dos partes sobre la Alternativa Bolivariana para las Américas, novedosa iniciativa integradora presentada hacía tres años por el mandatario venezolano. Ella se sustentaba en el pensamiento de Bolívar, Martí, Sucre, O'Higgins, San Martín, Hidalgo, Petí, Morazán, Sandino y de tantos próceres que lucharan por erigir una Patria Grande en América Latina, y cuya conformación —evidentemente— ha empezado.